

La posible incorporación de la prostitución al Derecho del Trabajo

Eneida Lima de Almeida

Universidad de Salamanca

Derecho del Trabajo y Trabajo Social

(La regulación del Mercado de Trabajo)

Sumario

Introducción.....	4
1. Breve resumen de la historia de la prostitución en España.....	6
1.1. Primer sistema reglamentarista.....	7
1.2. El reglamento madrileño de 1847.....	11
1.3. El reglamento madrileño de 1859.....	16
1.4. Los reglamentos madrileños de 1863 y 1865.....	20
1.5. Las disposiciones reguladoras de 1908.....	26
1.6. La crisis del sistema reglamentarista.....	28
1.7. El abolicionismo en España.....	29
1.8. El retorno del reglamentarismo.....	31
1.9. El final de la prostitución tolerada.....	32
2. Actualidad y futuro de la prostitución en el derecho español.....	35
2.1. Regulación Penal vigente de la prostitución y de los delitos relativos a ella.....	35
2.2. Regulaciones españolas de “establecimientos públicos dedicados a la prostitución” (Bilbao) y “locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” (Cataluña).....	41
2.3. Prostitución y trabajo en el Derecho español vigente.....	47
2.4. Las notas de laboralidad y sus posibilidades de aplicación a la prostitución.....	51
a) Voluntariedad.....	53
b) Retribución.....	53
c) Ajenidad.....	55

d) Dependencia.....	55
2.5. Algunas posibles dificultades para el reconocimiento de la prostitución como objeto del contrato de trabajo.....	59
2.6. Debates sobre una futura regulación de la prostitución como un tipo de trabajo ...	62
2.7. Análisis jurisprudencial laboral.....	66
3. Legalización de la prostitución como profesión en otros países.....	74
3.1. Holanda.....	74
3.2. Alemania.....	83
3.3. Grecia.....	86
3.4. República Checa.....	88
3.5. Nueva Zelanda.....	89
3.6. Australia.....	92
3.7. Estados Unidos.....	95
3.8. Suecia.....	96
4. La tendencia de la legalización de la prostitución como profesión en algunos países.....	97
4.1. Brasil.....	97
4.2. Tailandia.....	98
Bibliografía.....	99

Introducción

Hay Viagra en las farmacias, terapeutas sexuales en cada esquina, guías con propuestas afrodisíacas¹ y libros en profusión prometiendo un camino fácil sobre como obtener una vida sexual saludable y placentera.² Investigadores de diversas áreas eligieron como prioridad dar al mundo un sexo mejor, creando incluso la ciencia del sexo³.

Ahora, el sexo es un acto natural, está probado. Natural y hace bien, se probó también. Quien tiene una vida sexual saludable tiene índices menores de stress, lo que repercute en varios aspectos de la vida, desde mejorar la piel hasta retardar la muerte, al prevenir algunas enfermedades serias⁴.

¹Se encuentra incluso algunas recetas raras, que más parece una porción mágica, como por ejemplo, en el *El espejo o libro de las mujeres*: “Toma una parte de sangre de cabra, secada y reducida a polvo, dos partes de harina de cebolla, refinada y mézclalo todo con un buen vino. Calienta y cuece sin dejar enfriar. Bebe durante tres noches, y verás como esto te procurará un buen coito”, concluye el autor, cit. por Béatrice Bantman, *Breve Historia del Sexo*, ed. Paidós, Barcelona, 1ª edición, 1998, p. 32.

² El *Kama-sutra* hindú está lleno de consejos tan prácticos como precisos sobre las posturas (penetración, torsiones y contorsiones dignas del más ágil faquir). *Ibid.*

Algunos manuales eróticos con nombres prosaicos (*Libro de exposición en la ciencia del coito*) o poéticos (*Jardin perfumado para el recreo de la mente*) que se escribieron en el siglo XV. *Ibid.*, p. 36.

Un libro titulado *Los paraísos carnales* enumera ciento treinta y seis posiciones sexuales. Son muchas si se tiene en cuenta que los Clásicos sólo tenían treinta y dos, pero pocas cuando se sabe que, cuarenta años más tarde, un especialista de la informática (y en sexo también, yo creo) enumerará 322.633 en un ordenador. *Ibid.*, p. 74.

³ La ciencia Sexológica, una ciencia reciente con apenas tres décadas de existencia y que bebe de otras muchas disciplinas científicas como pueden serlo: la Biología, la Sociología, la Antropología Comparada, la Medicina o la Psicología.

⁴ Hay, por supuesto, opiniones divergentes, como por ejemplo, Liz Hondgkinson, autora del libro *Sexo no es obligatorio*, Javier Vergara Editor S.A., septiembre de 1998, Buenos Aires, pp. 11-12, en el cual afirma que es el celibato y no la actividad sexual lo que puede realzar la salud y el bienestar general.

Todavía añade más diciendo que una vez que una persona decide prescindir del sexo, mejoran su inteligencia, sus funciones mentales y la rapidez de sus reacciones. *Ibid.*, p. 22.

Lejos queda el tiempo en que la masturbación era pecado, la homosexualidad era crimen, posiciones sexuales, que se pudieran hacer, sólo había una⁵. Impotencia, eyaculación precoz, sexo oral, sexo anal, placer, orgasmos múltiples, clítoris, fetiche no eran asuntos para ser discutidos a la mesa.⁶ Ahora todo está cambiado, hasta el punto de decir que también tenemos, entre otros, el derecho al orgasmo.

Y es en busca de tal orgasmo que desde los tiempos primitivos muchos hombres y mujeres buscan el sexo de pago, el sexo en la prostitución. Servicios sexuales estos que en algunos países ya ha sido regulado como profesión⁷. Por esto, tal fenómeno ahora no solamente se discute en el ámbito penal, también en la disciplina laboral del derecho, a la cual daremos más énfasis en este trabajo.

⁵ Los burgueses de la era industrial hacían el amor vestidos(al menos con sus esposas). Bantman, B., op. cit. p. 17.

⁶ San Jerónimo acepta como única excusa para el matrimonio los terrores nocturnos y declara “adúltero al amante demasiado ardiente con su mujer”.*Ibid.*, p. 29.

Sólo el matrimonio da derecho a dejarse llevar, y con condiciones. La lista de prohibiciones se alarga con los textos y los años: ante todo, conviene no hacerlo muy a menudo. Nunca en jueves, precisa la Iglesia: Cristo fue arrestado un jueves. Tampoco en viernes, pues es el día en que murió. Ni los sábados, para honrar de este modo a la Virgen. Ni el domingo, día de María. Y evidentemente tampoco el lunes, en honor a todos los muertos. No se hace el amor ni antes ni durante la Cuaresma, Pascua, Pentecostés o Navidad. *Ibid.*, p. 30.

La represión culmina después del Concilio de Trento que prohíbe por primera vez todas las prácticas prenupciales, desde los escarceos (preliminares) a la penetración (intromisión), y reserva las relaciones sexuales a la estricta finalidad de la fecundación. *Ibid.*, p. 31.

⁷ Alemania, Holanda y Australia, en la actualidad, son los principales ejemplos que veremos más adelante.

1. Breve resumen de la historia de la prostitución en España

Aún sea muy antigua, al punto de que algunos lo llaman el oficio más antiguo del mundo, lo que no es ciertamente verdad⁸, seguro es también que no ha surgido en España. Pero la prostitución en España tiene su historia.

Dejando de lado los “baños” de la España romana, que constituyen una de las primeras instituciones de las que tenemos que hablar al referirnos a la prostitución, y los lugares donde se ejercía, la prostitución de la España visigoda, la cual quedaba reservada a las esclavas y poquísimas mujeres solteras, la España musulmana que fue mucho más laxa que la visigoda y que la España cristiana en cuanto al tratamiento legal y la persecución de la prostitución, pasaremos para la prostitución en la España Contemporánea, o sea, examinaremos algunas de las diferentes soluciones legales que se barajaron ante este fenómeno en los siglos XIX y XX.

El reglamentarismo⁹ (de mediados del siglo XIX hasta 1935), abolicionismo¹⁰ (en 1935), reglamentarismo¹¹ (de 1936 a 1956), abolicionismo¹² (en 1956 hasta hoy) serán nuestro objeto de estudio en curso de este capítulo.

⁸ Es probable que los primerísimos oficios del mundo fuesen el de recolector y cazador. Vide-Núñez Roldan, Francisco en *Mujeres Publicas: Historia de la Prostitución en España*, Ediciones Temas de Hoy, (Colección: Historia de la España Sorprendente), 1995, Madrid, p. 15.

⁹ Aparte de las disposiciones zaragozanas de 1845, y las de Madrid, hubo también 22 reglamentos de la prostitución señalados como tales hasta 1886 para toda España revela Jean-Louis Guereña en *La prostitución en la España contemporánea*, Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A., Madrid, 2003, p. 176.

Sin embargo, examinaremos solamente las Disposiciones tomadas por el gobierno de Zaragoza (por ser el primer que se tiene noticia en esta parte clave del reglamentismo), los reglamentos madrileños de 1847, 1859, 1863 y el de 1865 y las disposiciones reguladoras de 1908.

¹⁰ Como veremos más adelante, en 1935, un decreto- con fecha del 28 de junio- firmado por el ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social (Federico Salmón Amorío, miembro de la CEDA), suprimía toda reglamentación oficial de la prostitución.

1.1. Primer sistema reglamentarista

Puede considerarse como la primera reglamentación de la prostitución en España para la época contemporánea: las Disposiciones tomadas en 1845 por Antonio Oro, gobernador civil de Zaragoza, para la “policía médica de las mujeres públicas”. Estas disposiciones señalan en la práctica el retorno del reglamentarismo en España y el final de un largo paréntesis abolicionista iniciado en el siglo XVII¹³. Las quince *medidas* que estas disposiciones encerraban iban a formar la base de la reglamentación de la prostitución en Zaragoza a mediados del siglo XIX:

En el punto 2.º de estas disposiciones preveía que los médicos habían de practicar un reconocimiento médico semanal de las prostitutas, exigiendo de las mismas dos reales vellón por visita, así como señalar a las prostitutas o amas que dejaran de satisfacer dos visitas seguidas.

Los celadores de Seguridad pública eran encargados de informar bajo el apercibimiento de suspensión y pérdida de empleo del número de prostitutas que resultaban ocultas, las matrículas de las mismas con separación de barrios, expresando si estaban en casa particular por su cuenta o concurrían a las de las encubridoras(punto 3.º).

¹¹ Aun ya había sido derogada en la practica, solamente en 27 de marzo de 1941 se derogó oficialmente el decreto abolicionista de 1935, regresando al reglamentarismo.

¹² Este decreto de marzo de 1956 acabó oficialmente y en definitiva con la prostitución tolerada en España.

¹³ Guereña, Jean- Louis, op. cit. p. 19.

Dichas alcahuetas o encubridoras debían de señalar a los celadores nota de las mujeres que tengan o frecuenten su casa (punto 4.º).

Toda prostituta que dejase de sujetarse al registro semanal sería expulsada de la Ciudad, y lo propio se verificará con las encubridoras que consientan o admitan en su casa a las no reconocidas (punto 5.º).

El punto 6.º disponía que los celadores debían estar, pues, al tanto de todo cambio de domicilio de las prostitutas, comunicando a los facultativos quién salía y adonde se mudaba para que hiciese la anotación correspondiente en sus registros.

Enferma, la prostituta con medios podía quedarse en casa para curarse bajo la inspección del facultativo de su cuartel, pero si fuese pobre se trasladaba al Hospital general (punto 7.º).

Los puntos 8.º y 9.º preveían que los celadores debían pasar al Gobierno político todas las semanas un parte que expresase haber practicado el registro de las matrículas en su cuartel y avisar al comisario si alguna dejase de presentarse al reconocimiento para que sea buscada y compelida a verificarlo.

También podían practicar eventuales reconocimientos extraordinarios en el intervalo:

“ Los facultativos podrán visitar las casas de las encubridoras y prostitutas siempre que lo crean conveniente y las reconocerán cuando le sean sospechosas sin exigirles retribución alguna por este reconocimiento extraordinario; y las encubridoras

que tengan alguna sospecha de una prostituta aunque le presenten papeleta del facultativo podrán avisar a éste para que las reconozcan nuevamente porque es muy posible que el transcurso de la semana después de obtener la papeleta hayan enfermado”(punto 10.º).

Este mismo punto también afirmaba que la mera sospecha de enfermedad venérea podía conducir a la separación temporal de la prostitución:

“(…) Recibida queja de que algún sujeto haya enfermado por el uso de una de estas mujeres procédese contra la causante y contra la encubridora en cuya casa hayan estado, hasta el extremo de curársela y extrañarla de la población”.

Estaba previsto en los puntos 11º, 12º y 13º que cada quince días se reunieran los cuatros facultativos para acordar las medidas higiénicas que exigiera la conservación de la salubridad de las mujeres sujetadas a su inspección, y vigilaran en sus respectivos barrios para que no se cometan escándalos ni excesos en las casas de las encubridoras y prostitutas a las que dispensarán la protección debida. Debían también no sólo denunciar las eventuales infracciones cometidas por las prostitutas, sino por los propios cuerpos de seguridad.

Y por último establecía los puntos 14.º y 15.º respectivamente que los celadores debían tener bajo control a las mujeres amancebadas y que sin orden expresa del Gobierno político no podía darse de baja en las matrículas a ninguna prostituta.

El dispositivo reglamentarista zaragozano anuncia, pues, claramente el sistema de higiene especial que se implantará en toda España a partir del bienio progresista:

afirmación de los elementos de identidad prostitucional (registro y cartilla), control de movimientos (aunque no se llega aún a confinar a las prostitutas en un espacio y un tiempo determinado) y contribución financiera al sistema.

Los gobernadores que sucedieron a Oro conservaron, pues, el sistema reglamentarista adoptado sin modificarlo. El reglamento ulterior que se tiene conocimiento para Zaragoza, también firmado por el gobernador civil de turno, es ya de la época de la Restauración, en 1886, treinta años más tarde, cuando se había impuesto el término de higiene especial e funcionaban servicios *ad hoc* en casi todas las provincias españolas, lo que no significa, claro está, la inexistencia de posibles reglamentos intermediarios, en ocasión de los múltiples cambios políticos intervenidos entre ambas fechas, como durante el sexenio. Existen, en cambio, reglamentos posteriores, en 1889, 1892 y 1900.¹⁴

¹⁴ Guereña, Jean-Loius, op. cit. pp. 111-112.

1.2. El Reglamento madrileño de 1847

El Reglamento fechado en Madrid el 1 de julio de 1847 para la represión de los excesos de la prostitución en Madrid pretendía regular el ejercicio de la prostitución en la capital.

Muy largo y detallado se compone de 114 artículos, estructurados en nueve títulos: “De las prostitutas en general y de sus géneros y especies”, “Condiciones para la declaración y tolerancia de las rameras”, “Condiciones para la radiación y habilitación de las rameras”, “Del régimen de sanidad de las rameras toleradas”, “De las condiciones de tolerancia para la mancebías”, “Casa correccional”, “Del amancebamiento”, y finalmente unas “Disposiciones generales”.

Represión y reglamentación de la prostitución- para impedir sus excesos, o sea, su excesiva visibilidad, localizar y controlar su evolución- quedaban asociados. La tolerancia de la prostitución no la sanciona, y la Administración procurará disminuirla por cuantos medios estén a su alcance, afirmaba así el Reglamento de 1847 en su artículo 112. Y su título mismo era ampliamente significativo de este movimiento: reprimir los excesos de la prostitución en Madrid.

La definición de la prostituta era desde luego relativamente sencilla, pero operativa para los fines perseguidos por el Reglamento madrileño de 1847:

“Se entiende prostituta para los efectos de este reglamento toda mujer que vende su cuerpo habitualmente, tenga o no otra manera de vivir conocida”. (Art. 1)

Pero dentro de la categoría de prostituta, existían para la administración varios tipos, además de las mancebas, a las que también se hacía referencia (aquellas que viven en concubinato con un hombre, ya habiten o no en su compañía), las rameras sin domicilio fijo (que son las vagabundas, y no estaban autorizadas, quedando detenidas en casa de corrección, o expulsadas según el caso), las prostitutas con domicilio propio pero prostituyéndose fuera de él (en mancebías o casas de prostitución), y las mujeres que se prostituían en su propia casa (arts. 3 y 5). El lugar de la actividad prostitucional era, pues, determinante para la administración.

El Reglamento distinguía además entre varias clases de casas de prostitución toleradas: las mancebías propiamente dichas, que son aquellas donde habitan y se prostituyen ordinariamente dos o más prostitutas, clasificadas en dos categorías, según la presencia o no de una mujer tercera, las “Casas de paso”, que son aquellas donde no habita prostituta, pero que reciben rameras para su prostitución, y las “mixtas” que participan de una y otra especie. (art. 76). En cualquier caso, la administración exigía la presencia de una mujer responsable del establecimiento, que pudiera responder en todo momento del comportamiento de las prostitutas que trabajaban en él y que debían de ir provistas de una cartilla sanitaria.

El elemento constitutivo de la reglamentación lo representaba primero la inscripción de la prostituta en un “registro especial” que hacía ingresar precisamente a una mujer en la categoría de prostituta¹⁵, y donde era más fácil quedar inscrita que borrada (arts. 25 y 32). La declaración de ramera se realizaba por los Comisarios, por

¹⁵ Al matricularse, viniendo a ser un mero número de orden en el registro, abandonada la prostituta su condición misma de mujer, perdiendo sus señas de identidad propias (y hasta su nombre y apellido original cambiados por un apodo profesional) para adoptar las de una mujer pública que ya no disponía de identidad.

notoriedad cuando no hubiere oposición de parte de la interesada; en virtud de expediente gubernativo si la hubiese (art. 18). No era, pues, una operación voluntaria, sino sometida a la discreción de las autoridades, que podían matricular a una mujer contra su voluntad.

Tal inscripción en el registro prostitucional conllevaba la obediencia al reglamento correspondiente, y en particular la obligación de someterse a las visitas sanitarias periódicas realizadas por los inspectores de sanidad (arts. 63-68). La cartilla sanitaria, el padrón, de la que debían quedar provistas en permanencia las prostitutas (art. 36) permitía controlar su estado sanitario por las anotaciones de los inspectores de sanidad (arts. 69 y 74).

La prostituta, y sólo ella, podía ser considerada incluso responsable de contagio sifilítico y acusada y condenada como tal:

“ Si se acusare a una ramera de haber contagiado a otra persona, y el hecho resulta gubernativamente probado, se la condenará a pagar la cura del contagiado, a seis meses de arresto en la casa de corrección después de curada ella misma, y a expulsión perpetua de la corte”.(Art. 75)

Como vimos, no se admitía desde luego a prostitutas vagabundas sin domicilio fijo (art. 3.1 y 6), difíciles de controlar por la administración. Oficialmente, no podrían ejercer la prostitución mujeres menores de dieciocho años (arts. 22y 91). Tampoco lo podrían las mujeres casadas, o por lo menos las que no habían sido abandonadas por sus maridos o sus padres (art. 17), los cuales ejercían entonces una potestad legal sobre la mujer.

En general, las prostitutas no debían vivir en compañía de un hombre, aunque sea padre, hermano o marido (art. 38), ni con sus hijos de más de siete años (arts. 40 y 81.5), ya que “para conservarlos ha de renunciar precisamente a su mala vida”. El único hombre tolerado junto a la prostituta era a fin de cuentas el cliente, y se aceptaba la sola presencia de una mujer no prostituta en el burdel, y esa pasando de cuarenta años, aunque sea madre o hermana (art. 39).

Del mismo modo que no podía disfrutar de una vida de familia “normal” (con maridos e hijos), la prostituta había de vivir encerrada en un espacio totalmente acotado, como en régimen de residencia vigilada:

“La ramera tolerada no puede residir más que en los puntos de la Capital donde expresamente se la autorice, y siempre que haya que mudar de domicilio solicitará la autorización competente” (art. 41).

Este Reglamento de 1847 también pretendía limitar estrictamente la libertad de circulación de las prostitutas en el marco urbano:

“Se permite a las ramerías toleradas salir de su casa durante el día, pero sólo para atender a sus negocios si los tienen, de ningún modo para pasear por las calles. Las salidas de día han de hacerlas en traje decente, con exclusión de los que por su rareza o deshonestidad puedan causar escándalo” (art. 49).

“Durante el paseo no se permite a las prostitutas ir más de dos juntas, ni detenerse, ni menos sentarse en las calles y plazas” (art. 51).

Podían, no obstante, salir tan sólo unas horas por la noche y en algunos lugares de la ciudad únicamente, siempre que no sea en grupo:

“ Desde una hora después de anochecido hasta las nueve de la noche en invierno , y hasta las once en verano, se permite el paseo de las ramera, siempre en traje decente y honesto, con prohibición de provocar a los transeúntes, y con exclusión de los parajes que la autoridad tenga a bien señalar”(art. 50).

“En particular, durante este “paseo”, no quedaban autorizadas las prostitutas en detenerse, ni menos en las calles y plazas” (art. 51).

Toda forma de publicidad prostitucional quedaba excluida. Se les prohibía desde luego a las prostitutas de provocar (por actitudes o palabras) al cliente potencial, ni tampoco asomarse a los balcones de la casa de prostitución (art. 43), cuyas vidrieras habían de tener en permanencia cortinas bastante tupidas para que desde la parte exterior nada pueda verse de lo que pasa en la interior(art. 44).

En cuanto al cliente de la prostitución- ese gran desconocido-, estaba teóricamente prohibido a las prostitutas y amas recibir en los burdeles a los jóvenes menores de veinte años (art. 46), y los menores de veinticinco años, que era entonces la edad legal para ser elector, no podían pasar la noche en la casa de prostitución (art. 81.7).

Para poder ejercer su actividad, las prostitutas toleradas (tanto las amas como las pupilas) habrían, pues, de pagar una “cuota” o un “impuesto”, para sufragar los gastos que su vigilancia y corrección irrogan a la administración (arts. 21.2, 35, 80.4, 81.1 y 97.1)¹⁶.

¹⁶El pago de una cantidad para ejercer la prostitución era esencial en un régimen de tolerancia de la misma, haciendo en cierto modo de las autoridades reglamentaristas unos proxenetes, interesados directamente, por lo tanto, en la perpetuación del sistema. La importancia de las cantidades movidas por

Un gran papel se daba además a la casa de corrección (arts. 97-106), con un departamento especial para niñas, bajo la responsabilidad de una “sociedad de señoras” y el que se detendrá a las menores de diez y ocho años iniciadas de prostitución, para su enmienda y enseñanza (art. 102).

También desempeñaba gran importancia la noción de escándalo como asociado indeleblemente a la figura de la prostituta, deshonrada por principio. Sólo bastaba como prueba, por ejemplo, la “declaración conteste de dos vecinos honrados” art. 56) para expulsar a la prostituta de la casa en que habite y obligarla a vivir en “un barrio extraviado”. E incluso cuando ésta no causara ningún escándalo, siempre que la mitad de los vecinos exijan la expulsión de la ramera les será concedida, (art. 57), lo que demostraba ampliamente la total marginalidad a la que se veía reducida la prostituta.

los servicios administrativos que recibirán el impuesto de higiene especial ha provocado una batalla de competencia entre autoridades municipales y provinciales. Guereña, Jean- Louis, op.cit. p. 128.

1.3. El Reglamento madrileño de 1859

Este reglamento publicado por el gobierno de la provincia de Madrid el 30 de abril de 1859 se componía de 26 artículos, sin estructurarse en títulos.

Sirvió de modelo a otros reglamentos y establecía el conjunto de medidas que vendrán a ser clásicas en materia de reglamentación, como en primer lugar el “registro reservado” en el que serán inscritas todas las mujeres que se dediquen a la prostitución” (art.1):

“En este registro se expresará el nombre, domicilio, naturaleza, estado, edad y ocupación anterior de las inscritas, así como su calidad de meras prostitutas o de amas de casas destinadas a tal objeto. Habrá también una casilla de observaciones en la que se anotará circunstanciadamente todo lo relativo a enfermedades, hechos punibles, castigos, &, de las prostitutas” (art.2).

Cuatro clases de prostitutas matriculadas eran distinguidas por el nuevo reglamento madrileño (art. 3): las “amas de casa” (al frente de sólo una “casa”- art.7-) con y sin “huéspedas” (seis como máximo- art.7-), las prostitutas “que se hallan de “huéspedas” (mayores de quince años- art.19-) y las prostitutas con domicilio propio. Todas ellas debían de ir provistas en permanencia de una “cédula especial de vecindad” de la que no podían separarse durante el transcurso de su vida prostitucional en la capital (arts. 4 y 5) y, además, de una cartilla sanitaria en la cual se anotaba por los facultativos el estado de salud en que las mismas se encontraban (art. 12) y que las

prostitutas no podían negarse por ningún concepto a exhibir a cualquiera persona que lo exigiera (art. 14).

Otra pieza esencial del dispositivo reglamentarista, las visitas sanitarias obligatorias (incluidas las amas menores de cuarenta y cinco años- art. 13-), a cargo de médicos designados por el gobernador, eran semanales (art. 8). Reconocidas enfermas, en el mismo día en que se verificaba el reconocimiento, las prostitutas debían ser conducidas al hospital para su curación (art. 9), salvo las que disponían de domicilio propio que podían ser asistidas en sus casas, para lo cual habían de valerse precisamente de los facultativos nombrados por el Gobernador (art. 15). También en el universo prostitucional existían diferencias sociales y, por lo tanto, respuestas diferenciadas.

Todo un conjunto de prohibiciones teóricas encerraba el espacio prostitucional en un marco estricto. Las prostitutas matriculadas habían de vivir en un espacio acotado, y estaban como en régimen de residencia vigilada. Su libertad de circulación era limitada y sólo podían salir unas horas por la noche y a algunos lugares únicamente, siempre que no sea en grupo:

“Se prohíbe a las prostitutas presentarse en los paseos públicos a la hora de la concurrencia. Cuando salgan a la calle no podrán hacerlo más de dos juntas, sin pararse a conversación, ni llamar a nadie provocativamente causando escándalo, y transitando siempre por la acera izquierda” (art. 17).

En particular, no podían (en principio) las prostitutas frecuentar los cafés y otros lugares de sociabilidad (masculina), por lo menos durante las horas de afluencia:

“Se prohíbe a las prostitutas entrar en cafés, tiendas de licores, hosterías y demás establecimientos de esta clase a las horas de concurrencia pública en los mismos” (art. 18).

Las casas de prostitución toleradas eran sometidas a determinadas condiciones de apertura y de funcionamiento, y su instalación prohibida en proximidad de las iglesias, conventos religiosos, establecimientos de enseñanza, cuarteles y oficinas del Estado o de la provincia (art. 16). Los horarios de actividad prostitucional eran limitados:

“En toda casa de prostitución cesarán las visitas y reuniones a las doce de la noche en verano, y a las once en invierno, no pudiendo quedarse a pernoctar ninguna persona extraña a la misma” (art. 20).

Cualquier tipo de publicidad quedaba prohibido:

“Se prohíbe [...] circular anuncios o tarjetas, y colocar en las puertas, ventanas o balcones señal alguna que indique o revele este tráfico inmoral” (art. 16).

La administración exigía la presencia de una mujer responsable del establecimiento (el “ama de casa”), que pueda responder del comportamiento de sus “huéspedas” o pupilas. Incluso, cuando las infracciones al reglamento se cometan por prostitutas que se hallen de huéspedas, las amas de las casas respectivas serán penadas de la misma manera que las infractoras (art. 23). Y, fuera de los clientes, no debía haber ningún hombre en la casa, incluso como sirviente (art. 21).

Para poder ejercer su actividad, las prostitutas habían de pagar una serie de tasas por los reconocimientos médicos, que servían para financiar los gastos de funcionamiento del servicio, pero también toda clase de gastos de la administración:

“Las amas de casa son obligadas a pagar a los facultativos el importe de los reconocimientos, no pudiendo hacerlo en cantidad menor de veinte reales, sea cual fuere el número de prostitutas reconocidas. Las prostitutas con domicilio propio no podrán satisfacer a los facultativos por el expresado concepto, menos cuatro reales” (art. 11).

Para obligarles a respetar todo este conjunto de prohibiciones y obligaciones que les eran impuestas por la reglamentación en vigor, las prostitutas quedaban sometidas a una constante vigilancia policial, a cargo del cuerpo de vigilancia general, y de hecho todo el dispositivo estaba en manos de los inspectores de vigilancia de la capital (art. 26). En caso de no respeto de la reglamentación, multas y sanciones estaban previstas, que podían ir hasta el encarcelamiento y la expulsión de la ciudad:

“Las infracciones de los anteriores artículos serán castigadas con multas, en la cantidad que el Gobernador juzgue oportuna, y con prisión en caso de insolvencia. A las prostitutas reincidentes se las expulsará de la Corte, trasladándolas por tránsito de la Guardia Civil a los pueblos de su naturaleza” (art.22).

1.4. Los reglamentos madrileños de 1863 y 1865

Tanto el Reglamento de 30 de abril de 1859 como las demás disposiciones relativas a la prostitución fueron derogados por el *Reglamento de vigilancia especial de mujeres públicas* publicado el 30 de septiembre de 1863.

Los 71 artículos del reglamento venían dispuestos en 8 títulos: “Objeto y organización de la vigilancia especial” (arts. 1-8), “De las prostitutas” (arts. 9-22), “De las casas toleradas” (arts. 23-37), “De la vigilancia y policía de las prostitutas” (arts. 38-43), “Inspección facultativa” (arts. 44-54), “Disposiciones penales” (arts. 55-61), “De los fondos, su recaudación e inversión” (arts. 62-70), y “Disposiciones generales” (art. 71).

A cargo de la inspección “especial” estaba además de la vigilancia en las calles, casas toleradas y domicilio de las prostitutas libres, el padrón especial de prostitutas, registro, matrícula, cédulas de residencia y cuanta documentación sea peculiar del ramo (art. 39). Se debía procurar “la represión de actos y palabras que ofendan la honestidad, la moral y la religión, en cualquiera mujer pública que se adviertan” (art. 41.2), y la vigilancia debía extenderse también a la vida y costumbres de las prostitutas y cuantas personas frecuenten su trato (art. 41.3).

Pocas novedades introducía de hecho este nuevo Reglamento de 1863, más detallado, no obstante, que el precedente. Las prostitutas, definidas como mujeres que se

entregan habitualmente a la prostitución, o sea al vil tráfico de su cuerpo (art.9), eran de dos clases:

“1. Mujeres con domicilio fijo en casas de prostitución toleradas por la autoridad. 2. Mujeres con domicilio en casa particular, que ejercen la prostitución en ella o en las casas toleradas, y reciben el nombre de prostitutas libres” (art. 10).

La inscripción en el registro de prostitutas se entiende siempre voluntaria [...] (art. 12) y la prostituta que al inscribirse reconociere haber entrado en la prostitución seducida, ignorando sus consecuencias, y manifestase deseo de no seguirla, será entregada a su familia o amparada en el establecimiento correspondiente, si lo primero no fuere posible (art.14). Las autoridades debían formar un expediente administrativo para comprobar la veracidad de sus datos, y reunir cuantas noticias se crean necesarias a fin de adquirir un conocimiento exacto del grado de perversión de la inscrita (art. 15).

Una vez matriculada muy difícil era desde luego obtener su supresión de dicho registro, y las autoridades acumulaban las condiciones:

“La prostituta que desee abandonar el tráfico, retirándola los documentos especiales, deberá solicitarlo del Excmo. Sr. Gobernador ofreciendo acreditar:

1. Que hace algún tiempo está separada de hecho. 2. Que observa buena vida y costumbres, sin mantener relaciones ilícitas con ningún hombre. 3. Que cuenta con medios honrosos de subsistencia, según su clase. 4. Que ofrece persona que garantice en adelante su conducta” (art.21).

La prostituta que se casare o fuere reclamada por su familia, queda desde luego separada de la vida, y se la recogerán los documentos bajo los apercibimientos necesarios (art.22).

La cartilla sanitaria ya llevaba en su portada el retrato en fotografía de la interesada (art. 13). La vigilancia médica y policial del universo prostitucional seguía siendo muy estricta y la libertad de movimiento de las prostitutas muy limitada:

“Las prostitutas inscritas quedan sujetas a los reconocimientos ordinarios y extraordinarios que marca el Reglamento; a los que acuerde la autoridad competente y a cuantas medidas tiendan a reprimir los males físicos y morales que provienen de su vil tráfico” (art. 16).

“[...] Ninguna prostituta puede mudar de domicilio sin causa justificada más de dos veces al mes” (art.19).

Se prohíbe a las prostitutas frecuentar los paseos y reuniones públicas en las horas de concurrencia, de modo que puedan ser conocidas por tales, produciendo escándalo con su presencia. Asimismo se las prohíbe transitar solas por las calles sin el recato y compostura de las mujeres honestas; reunirse más de dos, pararse, conversar con hombres, detenerse en las esquinas y puertas de las casas para atraer a los transeúntes, y todo acto ofensivo a la moralidad y decoro públicos (art.20).

Era objeto de persecución particular la prostituta clandestina, no matriculada en los registros (arts. 41.4 y 53).

Las casas de prostitución toleradas no debían disponer de ningún signo o característica visible desde el exterior, y no podían hacer ningún tipo de publicidad que revelase el tráfico inmoral de la prostitución (art. 32).

El 14 de noviembre se publican otro importante conjunto de disposiciones reglamentarias: el Reglamento de 1865. De hecho se trataba en buena parte de una reprise del Reglamento de 1863:

“Las disposiciones del presente Reglamento en nada derogan las generales de la vigilancia y empadronamiento, que continuará observándose [...]”.

El reglamento madrileño de 1863

Inspirado directamente en el de 1863, *el Reglamento de vigilancia especial de mujeres públicas* de 1865, compuesto de 68 artículos estaba estructurado en 8 títulos que corresponden, con sólo una excepción, a los del reglamento de 1863: “Objeto y organización de la vigilancia especial (arts. 1-8), “De las matrículas” (arts. 9-22), “De las casas toleradas” (arts. 23-37), “De la vigilancia y policía de las prostitutas” (arts. 38-43), “inspección facultativas” (arts. 44-51), “Disposiciones penales” (arts. 52-58), “De los fondos, su recaudación e inversión” (arts. 59-67), y “Disposiciones generales” (art. 68).

Este Reglamento madrileño es relativamente bien conocido y a menudo citado desde el siglo XIX, pues fue recogido por Amancio Peratoner en su traducción y

continuación de la *Historia de la prostitución* de Dufour¹⁷. Servirá también a menudo de texto de referencia para otras autoridades locales, incluso en fechas muy posteriores.

Es también más significativo en la precisión con la que se detallaban los reconocimientos médicos a los que eran sometidas las prostitutas:

“Uno de estos reconocimientos, por lo menos, se hará empleando el Speculum, y se extenderá al examen de la cabeza, boca, pechos, ano y aparato sexual”.

¹⁷ Amancio Peratoner en Pedro Dufour, *Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo, desde la antigüedad más remota hasta nuestros días*. Parte última (t. II), Barcelona, Establecimiento tipográfico-editorial de J. Pons (Biblioteca hispano-americana), s.f. (c. 1877), pp. 1038-1043, cit. por Guereña, Jean-Louis, op. cit. p.159.

1.5. Las disposiciones reguladoras de 1908

Las disposiciones reguladoras de la prostitución adoptadas el 1 de marzo de 1908 consideraban una vez más la posibilidad de desterrar una “plaga social” tan arraigada como antigua.

Según estas disposiciones, la organización e inspección del servicio de higiene de la prostitución recaía en las comisiones permanentes de las Juntas provinciales de Sanidad en las capitales de provincia y en las Juntas municipales de Sanidad en las demás localidades (base 6.^a). Ambas debían de fijar en particular los derechos por reconocimientos médicos, teniendo en cuenta para la tasación la importancia de la localidad y las costumbres en ella establecidas. Pero en ningún caso y por ningún otro concepto que el del reconocimiento facultativo [...] podrá exigirse a las casas públicas ni a las mujeres dedicadas al tráfico cantidad alguna (base 7.^a).

La inscripción voluntaria y gratuita de las prostitutas, mayores de veintitrés años, ya sea como pupilas en casas toleradas, bien acudiendo a casas de citas o bien libremente, debía realizarse en un registro especial, que se llevará en el Gobierno civil por la Inspección municipal de Sanidad, en los otros casos (base 2.^a).

Prostituyéndose en burdeles o “casas toleradas”, en casas de citas o libremente, las mujeres quedaban sometidas a una estricta vigilancia sanitaria y gubernativa o policial para los efectos del orden público y del ejercicio discreto de su industria (base 8.^a). Cada casa de prostitución tenía obligación de disponer de un médico bajo cuya

responsabilidad estaba “el estado sanitario de las mujeres dedicadas al tráfico” y “la higiene de la vivienda” (base 3.^a). Los reconocimientos de las prostitutas debían ser semanales y constar en un “libro registro” que será exhibido por la dueña de la casa a los clientes eventuales que le reclamen, y siempre a los Inspectores de Sanidad y a las Autoridades administrativas. Las prostitutas que no vivían en casas de prostitución tenían obligación de presentar una vez a la semana en la Inspección provincial o municipal de Sanidad un certificado sanitario de reconocimiento expedido por el médico de la localidad (base 5.^a).

1.6. La crisis del sistema reglamentarista

Raras serán a principios del siglo XX las ciudades españolas, por muy pequeñas que sean donde no se hubiera organizado un servicio de higiene especial. A fines de 1888, el sistema reglamentarista estaba implantado, pues, prácticamente en toda España (por lo menos en la casi totalidad de las capitales provinciales¹⁸). El mapa de acción del reglamentarismo se extendió entonces a toda España, y si bien existen algunas diferencias entre todos estos reglamentos, los grandes principios sobre los cuales descansaban permanecían idénticos, procediendo de la experiencia alcanzada en la etapa anterior. La casi totalidad de los reglamentos se presentaban bajo la forma de folletos impresos que debían adquirir las principales protagonistas del sistema.

Sin embargo, a pesar de esta casi unanimidad de las autoridades provinciales, podemos hablar de una crisis, ya patente en la etapa anterior, y de un fracaso relativo del reglamentarismo evidenciado por la abolición de la prostitución decretada por la Segunda República en junio de 1935.

¹⁸ Según Guereña, ob. Cit hubo solamente en esta época más de 50 reglamentos elaborados de 1889 a 1892. op. cit. p. 276. (vid. anexo n. 1).

1.7. El abolicionismo en España

En 1935, un decreto- con fecha del 28 de junio marca el final de una etapa del sistema reglamentarista.

Con este decreto, quedaba, pues, suprimida oficialmente toda forma de reglamentación de la prostitución, “el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este Decreto como medio lícito de vida” (art. 1). También obligaba el decreto a quienes (hombres y mujeres) padecieran enfermedades venéreas a recibir tratamiento y a someterse a revisiones periódicas en centros adecuados (art.3). En caso de menores o incapacitados, la responsabilidad en cuanto al tratamiento se hacía extensible a los padres o tutores de los afectados (art.4). El Estado se comprometía a facilitar tratamiento gratuito a todos los enfermos privados de recursos (art. 5). La obligación de denuncia, por parte de los médicos, de las personas afectadas de alguna enfermedad venérea quedaba reducida a los casos de rebeldía o incumplimiento por parte de las mismas cuando se presentaba una “evidente peligrosidad social” (art. 9). En estos casos, las autoridades sanitarias podían ordenar la hospitalización forzosa (art. 10). La misión de la Lucha Antivenérea sería investigar los focos de contagio (art. 11).

En cambio, lo que sí se llevó efectivamente a cabo en el mismo año de 1935 fue la supresión inmediata de los reconocimientos médicos periódicos de las prostitutas y de la obligación para éstas de disponer en permanencia de las cartillas sanitarias correspondientes:

“A excepción de aquellos casos en que de un modo concreto se dispuesto lo contrario por las Autoridades competentes, ninguna persona, a partir de esta fecha, y sea cual fuere su sexo o condición, está obligada en todo el territorio español a llevar documento ni certificado alguno relativo a su estado de salud, por lo que respecta a las enfermedades venéreas.”

1.8. El retorno del reglamentarismo

En la España aún republicana se derogó rápidamente el Decreto abolicionista de 1935, por ser inaplicable en la práctica y en razón misma de las circunstancias bélicas, volviéndose de hecho en el terreno a la reglamentación y a la práctica tradicional de la prostitución. No se conoce a pesar de todo una derogación oficial de la medida abolicionista de 1935.

Solamente por el Decreto del 27 de marzo de 1941, quedaba, en efecto, anulada oficialmente la prohibición de la prostitución decretada en junio de 1935, y se volvía, pues automáticamente, a contrario, al reglamentarismo tradicional en los siglos XIX y XX.

Como complemento del decreto, en mayo de 1941, una Orden de la Dirección General de Sanidad dictaba normas referentes a la Lucha Antivenérea:

“Teniendo en cuenta que el reconocimiento médico periódico de las personas en estado de salud aparente constituye una de las bases más inconvencibles de la higiene moderna, porque permite los diagnósticos más precoces, se impondrá como sistema a aquellas personas que por su género de vida puedan representar mayor peligro para la sociedad. Estos reconocimientos periódicos se llevarán a cabo en los Centros Oficiales Antivenéreos, y no se realizará de una manera rutinaria, sino que haciendo a cada enfermo peligroso su ficha clínica correspondiente y acometiendo el tratamiento adecuado en cuanto el Médico juzgue preciso” (art. 3).

Con el reglamentarismo volvieron a entrar en vigor los carnets sanitarios de los que tenían que estar provistas las prostitutas, así como las revisiones médicas consiguientes que éstas debían de pasar periódicamente, aunque con variaciones regionales.

1.9. El final de la prostitución tolerada (1956)

Pues bien, dos años antes que la ley de “Merlin” de idénticos propósitos en la tampoco muy lejana Italia¹⁹, y siete antes que en el vecino Portugal de Salazar²⁰, el gobierno español volvía a adoptar oficialmente el abolicionismo en materia prostitucional y procedía a cerrar en marzo de 1956 las casas de prostitución hasta entonces toleradas .

El Decreto abolicionista de marzo de 1956 acabó oficialmente con la prostitución tolerada en España, tras más de quince años de reglamentarismo durante el “nuevo régimen” implantado en toda España al final de la guerra de 1936- 1939:

“Quedan prohibidas en todo el territorio nacional las mancebías y casas de tolerancia, cualesquiera que fuesen su denominación y los fines aparentemente lícitos a que declaren dedicarse para encubrir su verdadero objeto”.

Poco tiempo después, se publicó la Orden de aplicación de la Presidencia del Gobierno del 23 de abril de 1956 por la que se dictan normas para la aplicación del Decreto-ley de 3 de marzo último sobre prostitución. Se mandaba en particular en este último formar una relación de prostíbulos y casas de tolerancia existentes en todo el territorio nacional (art. 2).

¹⁹ Ley apresentada por la senadora socialista Angelina Merlin y adoptada en 1958(ver Lina Merlin, *Chiusura della Case di Tolleranza*, Roma, 1949), cit. por Guereña, Jean- Louis, op. cit. p. 430.

²⁰ Alves da Costa, J., *Droga e prostituição em Lisboa*, 4ª ed., Publicações Dom Quixote (col. Best Sellers), 1983, Lisboa, p. 297.

Precisamente, el ingreso de España en 1955 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, suponía, en efecto, la aceptación española de sus grandes decisiones y normativas, entre las cuales figuraba desde luego la “Convención internacional para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución”, aprobada por la cuarta Asamblea General de la organización internacional celebrada en diciembre de 1949:

“Cada una de las partes de la presente Convención conviene en tomar todas las medidas necesarias para derogar o suprimir toda ley, todo reglamento y toda práctica administrativa, según las cuales las personas que se dediquen o se suponga que se dedican a la prostitución, hayan de ser inscritas en registros especiales, poseer papeles especiales o conformarse a condiciones especiales de vigilancia o declaración” [...] ²¹

Cabe apuntar, no obstante, que sólo sería en 1962 cuando el gobierno español ratificaría formalmente dicha convención internacional de 1949, en una fecha en la que algunos países miembros de la organización quedaban aún fuera de la convención.

Con el abolicionismo, toda forma de control sanitario de la prostitución también desapareció entonces oficialmente de la noche a la mañana, lo que suponía evidentemente una ruptura tajante con el sistema reglamentarista vigente hasta entonces.

La desaparición del reglamentarismo no iba a suponer la muerte de la prostitución, sino su transformación, su adaptación para responder a la demanda siempre presente.

²¹ Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena: Lake Success, Nueva Cork, 21 de marzo de 1950, art. 6º, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores (Registro de Tratados núm. 171), 1962.

2. Actualidad y futuro de la prostitución en el derecho español

2.1. Regulación penal vigente de la prostitución y de los delitos relativos a ella.

En el momento actual, el ejercicio de la prostitución por personas capaces mayores de edad es libre, tipificándose la conducta de quines se benefician de la explotación sexual ajena²².

El Código Penal español, en su versión de 1963, declaraba sujeto activo del delito de prostitución a quien cooperara, protegiera o reclutara a personas para introducirlas, mediante engaño, coacción o abuso, en el ejercicio de la prostitución. Asimismo, sancionaba la conducta de quienes facilitaran la infraestructura necesaria (edificios y locales) para el ejercicio de la prostitución.

Por último, tipificaba estas mismas conductas, sin necesidad de mediar engaño, cuando el sujeto pasivo del delito resultara ser un menor de edad. Esta regulación penal no pretendía sancionar a la prostituta sino al proxeneta, existiera o no el consentimiento de la persona prostituida.

En la década de los años ochenta se produce un cambio completo en la orientación y sistemática de la ordenación de los comportamientos en el conjunto de los

²² En la reforma del Código Penal efectuada en 1995, el Estado Español flexibilizó la ley. El Código Penal aprobado por la Ley 10/1995 de 23 de noviembre, eliminó el castigo para el proxeneta, penalizándose, únicamente, el proxenetismo ejercido sobre los menores de edad, cuando mediase violencia, intimidación y/o coacción. Además, este Código no se ocupaba del problema del emergente comercio sexual internacional, cuestión que fue no fue abordada hasta la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril que modifica algunos de los artículos del Título VIII, del Libro II del Código Penal (De los delitos contra la libertad sexual), que se refieren a la prostitución.

delitos vinculados a la sexualidad. El legislador pretende prescindir totalmente de la naturaleza y significado del acto sexual, para incriminar exclusivamente aquellos hechos que se estiman atentatorios a lo que se considera el único bien jurídico protegido: la libertad de las personas en el ámbito de su sexualidad. De forma que, tomando como criterio rector únicamente la ausencia de consentimiento o los vicios de éste (engaño, prevalimiento) y el medio (violencia o intimidación), construyen las distintas figuras delictivas del grupo. Únicamente en un segundo momento, ya en el caso de las agravaciones se podrá apreciar la naturaleza del comportamiento en el ámbito sexual.

En lo que hace referencia particular a los hechos punibles relativos a la prostitución, éstos ocupan el Capítulo V del Título VIII, hoy bajo la rúbrica “De los delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores”. Respecto a la anterior regulación, que procedía fundamentalmente de la reforma de 1963, se ha logrado una evidente simplificación, pues la misma introducía un interminable casuismo y por ello una gran confusión y falta de claridad. Como sabemos, en el sistema español la prostitución en sí misma resulta impune, no es objeto de persecución penal, sino que la trascendencia la otorga el legislador penal a los hechos cometidos por terceras personas en el entorno de las conductas mismas de prostitución.

En la regulación podemos distinguir los hechos relativos a menores de edad e incapaces, que ocupan el grueso de la misma y, por otra parte, los hechos relativos a prostitución concernientes a mayores de edad. En cuanto a las conductas sobre menores de edad o incapaces, se incluyen como hechos penalmente relevantes aquellos que

supongan la inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución (art. 187.1 CP).

Estos hechos resultan agravados cuando quien los realiza reúne la condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario público (art. 187.2), supuestos en los que el sujeto activo se aprovecha de una determinada relación de superioridad para realizar un delito. En un escalón de mayor gravedad, por encima de la conducta precedente (hiperagravación), estarían las conductas llevadas a cabo por autores pertenecientes a asociaciones u organizaciones dedicadas a la comisión de este tipo de actividades (art.187.3). En la reforma de estos delitos, llevada a cabo en el año 1999, se incluyó expresamente el favorecimiento de la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas menores de edad o incapaces con el fin de favorecer su explotación sexual, iniciando o manteniendo a ese menor en situación de prostitución (art. 188.4 en relación con el art. 188.2), lo que tras la reforma de 29 de septiembre de 2003 debe entenderse abarcado por la nueva regulación del art. 318 bis.

Otro grupo de conductas punibles referentes a menores son las de determinación a la prostitución a este tipo de víctimas (art. 188.3). En ellas el sujeto activo realiza una conducta de mayor entidad en la dirección de conducir al sujeto pasivo a la prostitución, ahora coactivamente (violencia o intimidación), mediante engaños o abusando de una situación de necesidad o superioridad.

También en este ámbito circunscrito a los menores se han incorporado conductas punibles consistentes en el empleo de menores en materiales pornográficos (elaboración, venta, difusión o exhibición, o facilitación de esta serie de conductas), así

como la posesión de estos materiales para la realización de alguna de las conductas descritas. Igualmente se incluye la utilización de menores e incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos (art. 189.1).

Por otra parte, en el ámbito de las obligaciones familiares pero no en el de los delitos contra las relaciones familiares (Título XII), sino en éste que estamos viendo, se ha tipificado como hecho punible la abstención, por parte de los sujetos obligados a ello, del deber de impedir la continuación en el estado de prostitución del menor o incapaz bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento (art. 189.4). Se requiere por tanto que medie o esté presente alguna de estas relaciones con el menor, que imponen determinadas obligaciones en la educación del mismo, de manera que si, con conocimiento del estado de prostitución o corrupción, no trata de impedir su continuidad o no acude a la autoridad competente, se realiza el delito señalado.

Finalmente, en lo que a los menores se refiere, hoy- tras la mencionada reforma de abril de 1999- la regulación vuelve a contar con el supuesto de corrupción de menores (art.189.3).

Las conductas relativas a mayores de edad en este terreno han perdido protagonismo tras la reformas de las últimas décadas. Fundamentalmente los hechos punibles responden a comportamientos de determinación a la prostitución, en las que el autor emplea violencia, intimidación o engaño, o bien abusa de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima precisamente para conseguir dirigir hacia la prostitución a la víctima o a mantenerse en tal actividad (art. 188.1). Lo relevante en estas conductas sobre mayores de edad es el ataque, directo o indirecto, a

su libertad con relación a la práctica de conductas sexuales, sin que los tipos en realidad impongan otro tipo de requisitos, sino más bien lo que hacen es establecer distintas modalidades de menoscabo del bien jurídico y de concretos medios de ejecución. En la reciente reforma de septiembre de 2003 el legislador ha añadido el castigo de la explotación lucrativa de la prostitución.

Como supuesto agravado se considera el cometido por autoridades, agentes de la autoridad o funcionarios públicos (art. 188.2). Al igual que sucedía para los menores, como consecuencia de la reforma de abril 1999 y respondiendo al contexto internacional en el que estamos inmersos, se había incluido expresamente como conducta sancionada el favorecimiento de la entrada, estancia o salida del territorio nacional con el fin de favorecer su explotación sexual (art. 188.2), ahora ya como delito de peligro y no de lesión. El Código Penal de 1995, para evitar que pudiesen ser comprendidas en el ámbito de lo punible formas de cooperación o protección de la prostitución ajena libremente ejercida, optó por la eliminación de la regulación contenida en el precepto anteriormente vigente relativo a la captación de personas para la prostitución. En coherencia con la consideración de la libertad sexual como exclusivo fin de tutela en el ámbito de este grupo de delitos el texto del Código se limitó a castigar como formas punibles de favorecimiento de la prostitución de adultos aquellas que supusieran una determinación coactiva, fraudulenta o abusiva a la prostitución. De forma que la nueva regulación penal de 1995 expresa y limitadamente incluía entre los delitos concernientes a la prostitución aquellas conductas que implicaran alguna forma de abuso de la voluntad de la víctima. Sin embargo a extrema observancia de la libertad sexual como único bien jurídico protegido llevó a la consecuencia de no incorporar ningún tipo penal que castigara la recluta de personas con fines de explotación sexual

lucrativa, lo que se entendió por algunos autores como un vacío legal que debía ser subsanado. El legislador penal de 1999 decidió abarcar estas conductas en la regulación mediante la creación del art. 188.2 en el que se considera punible la conducta de quien “directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su explotación sexual empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”, comportamientos que tras la última reforma de septiembre de 2003 se han reconducido a una nueva ubicación sistemática en el art. 318 bis.

Entre las disposiciones generales al conjunto de los delitos del Título VIII, se encuentra la previsión del legislador para que los jueces apliquen medidas de cierre de locales y establecimientos “... cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales...” (art. 194).

2.2. Regulaciones españolas de “establecimientos públicos dedicados a la prostitución” (Bilbao) y “locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” (Cataluña)

Hasta el momento sólo existen dos regulaciones jurídicas en esta materia, ambas de naturaleza reglamentaria. La primera en el tiempo es la Ordenanza municipal sobre establecimientos dedicados a la prostitución, de la ciudad de Bilbao, aprobada por Acuerdo Plenario de 12 de mayo de 1999 (BOB de 4 de junio de 1999)²³. La segunda es el Decreto del Gobierno catalán 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. Hay que recordar que su origen se enmarca en la preocupación de las instituciones regionales por el fenómeno, tal y como se manifiesta, por ejemplo, en la Moción 136/VI del Parlamento de Cataluña sobre la prostitución, de fecha 14 de febrero de 2002, mediante la que se instaba al Gobierno regional a “realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno del Estado para que regule los aspectos laborales del trabajo sexual, para establecer un marco legal y un reconocimiento jurídico para las personas que la ejercen, de acuerdo con los objetivos y resultados de la comisión especial para el estudio de la realidad y la problemática del fenómeno de la prostitución constituida en el Senado”.

Al decreto antes mencionado le ha seguido la Orden 335/2003, de 14 de julio, por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. El Decreto ha sido impugnado en octubre

²³ La Ordenanza fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante Auto 55/20001, de 14 de marzo de 2001, declaró la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa del recurrente “tanto en su condición de vecino de Bilbao como en su condición de Letrado de determinados locales a los que concierne la ordenanza impugnada”.

de 2003 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por una plataforma compuesta por varias asociaciones de mujeres²⁴.

De entrada, procede observar que ambas normas no se inscriben, ni mucho menos, y en contra de lo que pudiera parecer a simple vista, en la tendencia alemana, holandesa, etc. de regulación de la prostitución desde la perspectiva de los derechos de las mujeres (y hombres) que la ejercen, considerándoles ahora como trabajadores sexuales. Y no sólo porque ni una comunidad autónoma ni mucho menos un ayuntamiento son titulares de competencias sobre varios aspectos de la materia comprometidos (derechos fundamentales, seguridad social, legislación civil, fiscal y laboral, etc.), de modo que sólo el Estado podría, con algunas limitaciones que se discuten más abajo, abordar una regulación como la holandesa, etc. También hay que tener en cuenta que la finalidad de ambas normas ha sido, principalmente, la de asegurar el orden público y la tranquilidad vecinal. Por eso, ambas normas no pueden catalogarse como antecedentes del eventual establecimiento de un sistema de reglamentación del fenómeno de la prostitución en España, como, sin embargo, a menudo son presentadas ante la opinión pública. Su sentido y alcance, sobre todo en el caso de la Ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao, no es el de ampliar el catálogo de derechos de los trabajadores sexuales o el de reconocer jurídicamente la prostitución, sino, más bien al contrario, el de constreñir su ejercicio a ciertos límites urbanísticos de guarda de distancias mínimas entre sí (propios de las actividades molestas), higiénicos, etc. son normas jurídicas, pues, típicas del sistema de reglamentación (en la medida en que condicionan el ejercicio de la prostitución en los establecimientos públicos a una serie de requisitos, de

²⁴ Entre ellas, las de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente, la de Mujeres Separadas y Divorciadas, etcétera.

modo que los titulares de los locales que no los cumplan no podrán llevar a cabo la actividad²⁵.

La ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao está dividida en cuatro capítulos: preliminar (primero), condiciones urbanísticas de implantación (segundo), condiciones sanitarias (tercero) y régimen jurídico (cuarto). En el primer capítulo se especifica el objeto de la Ordenanza, que es doble, “fijar las distancias mínimas que deben guardarse entre aquellos establecimientos o locales abiertos al público en los que se ejerza habitualmente la prostitución” (art. 1.1) y “los requisitos mínimos de orden higiénico-sanitario que deben observar dichos establecimientos” (art. 1.2). También se regula en este capítulo el ámbito de aplicación, “todos los establecimientos o locales abiertos al público en los que, de forma declarada o no, se desarrolle habitualmente una actividad de prostitución, en cualquiera de sus variedades o fórmulas, o se concierne la misma, sean cuales sean el nombre comercial bajo el que operen y, en su caso, la naturaleza de la actividad principal que se ejerza en los mismos” (art.2.1); de modo que la norma no se aplica a la prostitución practicada “en domicilios o viviendas particulares que no sean establecimientos públicos (art.2.2). En su artículo tercero, que cierra el capítulo primero, se estipula que esta disciplina municipal “es independiente de la legislación penal que, en su caso, sea de aplicación, e, igualmente, de la normativa en materia de espectáculos públicos, o de cualquier otra sectorial que corresponda”.

El Decreto del Gobierno catalán 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, es una norma más completa y detallada. La exposición de motivos tiene interés para conocer la *voluntas*

²⁵ Estas normas permiten, además, a las autoridades municipales reaccionar de algún modo contra las eventuales protestas vecinales frente a locales que alteren de algún modo la tranquilidad vecinal.

legislatoris. En ella se explica se proceso de creación y las razones por las que se adopta. En Gobierno catalán, “ante el aumento de la práctica de la prostitución”, especialmente por parte de “personas que pueden encontrarse en la esfera de la exclusión social”, creó en septiembre de 2001 una Comisión “con el objeto de elaborar las propuestas necesarias” para aportar mayor “transparencia y control a la mencionada situación”, estudiar las medidas necesarias “para regular el ejercicio de la prostitución”, “desincentivar la actividad” y “velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas que la ejercen”.

El Decreto tiene como objeto “establecer los requisitos y las condiciones que tienen que reunir los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, así como los reservados anexos donde se desarrolla la prestación de servicios de naturaleza sexual, y establecer limitaciones y las prohibiciones inherentes a estos tipos de establecimientos” (art. 1). Se considera “prestación de servicios de naturaleza sexual”, la actividad ejercida de manera libre e independiente por el prestador o la prestadora del servicio con otras personas, a cambio de una contraprestación económica, y bajo su propia responsabilidad, sin que haya ningún vínculo de subordinación por lo que respecta a la elección de la actividad, llevada a cabo en reservados anexos a las dependencias principales de determinados locales de pública concurrencia” (art. 2).

El Decreto establece los requisitos de (a) las instalaciones (b) la protección de los menores de edad (c) los servicios de vigilancia (d) y sanitarios, y (e) el procedimiento de concesión de licencias, de infracciones y sancionador.

a) En cuanto a las instalaciones, la norma establece ciertas condiciones para “los reservados anexos” (art. 6: tienen que tener, en los términos que señalen los Ayuntamientos mediante Ordenanza, habitación, baño, ducha, bidé, ventilación, aislamiento acústico, mobiliario, condiciones higiénicas-sanitarias) y para la ubicación y condiciones de los establecimientos (art. 7: tienen que tener acceso directo por la vía pública, el acceso a sus reservados anexos tiene que efectuarse, sin embargo, desde el interior del local principal, no pueden ubicarse “en la proximidad de centros docentes o de otros tipos de locales de ocio o que por la naturaleza de su actividad supongan la afluencia de menores de edad”, los Ayuntamientos tendrán que determinar unas distancias mínimas entre la ubicación de estos tipos de locales, así como sus “condiciones de emplazamiento”). El Decreto también concreta, en el art. 13, el horario de apertura (17h) y cierre (4h y 5 h para la noche de los viernes, sábados y vísperas de festivos).

b) La protección de los menores es el objetivo de distintos preceptos de la norma: los menores no pueden entrar en este tipo de locales (art. 8.2) y es obligatorio, además, hacer pública esta prohibición en un letrero en sus accesos visible desde el exterior y, si procede, en las taquillas de venta de localidades... (art. 9 a); “tienen que respetarse el resto de prohibiciones establecidas en la normativa vigente sobre la protección de la infancia y adolescencia” (art. 8.3); se exige que el control de la prohibición de acceso de los menores de edad a los citados locales lo ejerza la persona titular o las personas designadas por ésta que efectúen el control de acceso del público al local y podrán exigir la presentación del documento nacional de identidad u otro documento justificativo de la personalidad, a fin de que acrediten su edad (ar. 10).

c) Especifica también el Decreto (art. 11) que los locales tienen que disponer, como mínimo, de “un o una vigilante de seguridad durante todo su horario de funcionamiento”. A partir de 50 personas de aforo tienen que disponer de otro más y así siguiendo por cada fracción de 50 personas. Además, los Ayuntamientos pueden dictar reglamentos complementarios en relación con los servicios de vigilancia.

d) En relación con los servicios sanitarios, la norma obliga a los titulares de los locales de pública concurrencia a “garantizar que las personas que prestan servicios de naturaleza sexual estén sujetas a las medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial contenidas en los programas de atención dirigidos a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual” (art. 12.1). En los locales deberá “garantizarse a todas las personas usuarias el acceso a preservativos, debidamente homologados y con fecha de caducidad vigente, que se podrán entregar personalmente o bien mediante máquinas expendedoras” (art. 12.2). Y en el interior de los locales “deberá fijarse, en lugar perfectamente visible para las personas usuarias, un cartel advirtiendo que el uso de preservativo es la medida más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida” (art. 12.3).

e) El lícito ejercicio de la prostitución en locales de pública concurrencia se condiciona (art. 15) a la obtención de la “licencia municipal específica para realizar este tipo de actividad” (sin perjuicio de la necesidad de obtener el resto de licencias requeridas con carácter general). El local debe cumplir las obligaciones que establece el Decreto (los mencionados, al que hay que añadir que el titular del local “tenga concertado un contrato de seguros que cubra el riesgo de responsabilidad civil” (art. 14). La inspección y vigilancia de los locales corresponde a la policía de la Generalidad-

mozos escuadra- (competente en materia de inspección de espectáculos) y a la policía local y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a las “técnicas competentes en razón de la materia” (art. 16). El incumplimiento del Decreto será sancionado de acuerdo a lo que prevé la Ley 10/1990 sobre policía de espectáculo, actividades recreativas y establecimientos públicos y lo que disponga la normativa municipal sobre esta materia (art. 17).

2.3. Prostitución y trabajo en el Derecho español vigente

El Derecho del Trabajo intenta ajustar a la realidad social de la economía y del propio trabajo, así como a su evolución, por eso su carácter es, por su propia naturaleza, expansivo ya que va cubriendo con el devenir del tiempo las nuevas formas de manifestarse las relaciones de prestación de servicios. Así el Derecho del Trabajo ha ido (y sigue haciéndolo) abriéndose a la introducción en su ámbito subjetivo de nuevos planteamientos, incorporando a las transformaciones sociales de quiénes hayan de ser considerados trabajadores por cuenta ajena y por consiguiente tutelados por el ordenamiento laboral. Esta manifestación expansiva presenta una evolución que va a la par del propio dinamismo social y productivo. Al lado de la cambiante realidad económica y social, en sede judicial primero y a través del poder legislativo después, las normas se adaptan a nuevas figuras e introducen en su cobertura personal como trabajadores por cuenta ajena nuevos sujetos utilizando la técnica de las inclusiones redeterminadas relaciones de servicios, nuevas ocupaciones, o actividades profesionales que anteriormente eran consideradas ajenas a aquel Derecho.

Al abordar el tema de la prostitución como hipótesis podríamos ver que el Derecho del Trabajo conseguiría, una vez más, desarrollar un papel expansivo al introducir en su seno esta “profesión”, aunque no sería en este caso porque la misma aparezca a partir de un momento determinado de la historia, pues como se viene manteniendo por todos los foros y es sobradamente conocido desde el principio de los tiempos se ha producido este tipo de contactos sexuales a cambio de dinero, ni tampoco porque haya cambiado la prostitución en lo modos de practicarse- puesto que siempre

ha existido un tercero que se beneficiaba de los ingresos²⁶ obtenidos por el ejercicio de la prostitución ajena-, sino más bien por las mutaciones que va sufriendo desde su apreciación jurídica este comportamiento de la prostitución a lo largo de los últimos años.

Así pues, estamos viviendo un momento en que los Códigos Penales han dejado de tipificar como delito algunas actuaciones relacionadas con la prostitución y también lo hicieron en un momento posterior con algunas de las figuras estrechamente vinculadas a ella, casos del proxenetismo, que luego son nuevamente castigadas respondiendo a un movimiento pendular, al menos esta última conducta, por ejemplo en España- a partir de la reforma del Código Penal de septiembre de 2003.

Podemos, o no, entender que éste es el paso intermedio para lo que se ha denominado la normalización de esta conducta hacia su consideración como posible objeto del contrato de trabajo o en su caso de otras relaciones propias del tráfico jurídico, sean éstas civiles o mercantiles. En ese sentido se han manifestado algunos

²⁶Datos del Instituto de la Mujer cifran en 300.000 las prostitutas en España, lo que genera, según la senadora Klimowitz, un movimiento de más de 12.000 millones de euros (dos billones de pesetas) al año.

A quien crea que la prensa no será objetiva ante la posibilidad del abolicionismo porque se quedarían sin los ingresos de los anuncios clasificados.

Los aspectos económicos de este negocio son, probablemente, junto a las condiciones laborales en el que se desarrolla, la razón de que sea un fenómeno oscuro y opaco. Hemos podido estimar a la baja el dinero que se mueve en Salamanca, una provincia pequeña con aproximadamente 350.000 habitantes, la mitad de ella rural y la otra mitad vive en la capital, en donde el negocio sexual mueve alrededor de los 10.000 millones de pesetas de las antiguas al año, unos 7.000 millones en negocio sexual y unos 3.000 millones en servicios de copas. En el momento en que se elaboró el estudio eso suponía el 1,3 por ciento del PIB de toda la provincia. El cálculo estaba realizado a la baja, pero con él pudimos aproximarnos a una estimación referente a que cada mujer ejerciente de la prostitución genera al mes unas 900.000 pesetas de las que como mucho percibe, la que más, 250.000 o 300.000, según la categoría, porque las más bajas no perciben absolutamente nada y, por tanto, más del 70 por ciento del negocio que se mueve queda dentro de la red. Por supuesto, éste es un negocio de dinero negro, no paga IVA, ni IRPF, absolutamente nada.

autores²⁷, que comparan en su proceso evolutivo esta situación- eso sí salvando la diferencia- con el trasiego que su día tuvo el reconocimiento de la libre asociación sindical, que desde su consideración de acto punible, tipificado en los códigos penales como delito: las coaligaciones para alterar el precio de las cosas, pasó por una etapa de tolerancia o de indiferencia por parte del Estado a ese tipo de asociación, para luego integrarse en el Derecho del Trabajo hasta el punto que la libertad de sindicación alcanza la consideración de Derecho Fundamental.

La comparación que se hace por la doctrina alegada interpreta que en este momento estaríamos en ese período de transición donde ya no se considera delito la prostitución ni tampoco algunas de las conductas que aparecen en su entorno, pero aún no ha sido regularizada la actividad como profesión u oficio y acogida como tal por el ordenamiento laboral; así que estaríamos viviendo en la actualidad esa fase intermedia o de tolerancia.

De ello no puede inferirse automáticamente que el ordenamiento jurídico tolere o permita el ejercicio libre de la prostitución. Por otro lado, como veremos más adelante al analizar la jurisprudencia predominante el derecho español hoy considera (en la interpretación realizada por aquélla) que aunque ya no es un ilícito penal sí entra dentro de la consideración de un ilícito civil, la antijuridicidad está presente porque las prestaciones o la función del contrato no son adecuadas a las reglas de no sólo el Derecho civil o común que se hace presente ya no en el plano penal- lesionando algún

²⁷ Vid. Torrents Margalef, J., “La normalización laboral de la prostitución: modelo de integración social de nacionales e inmigrantes”, *Comunicación al XII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, Santander, junio de 2001, p. 449, publicado en *Derechos y libertades de los extranjeros en España*, tomo I, Ed. AEDTySS/Gobierno de Cantabria, Santander, 2003, pp. 447 a 474.

derecho protegido por él- y sí en el civil contractual²⁸, y por tanto no confiere eficacia jurídica ni efecto alguno a un contrato que es calificado como nulo, sino (según otra doctrina judicial más moderna²⁹) a los principios éticos y valores inspiradores de todo el ordenamiento jurídico, en particular de la Constitución española de 1978.

²⁸ Algunas sentencias pronunciadas en los años que siguieron a la despenalización del proxenitismo/rufianismo en nuestro Código Penal de 1995 (periodo que transita entre los años 1995-2003), ya apuntaban en esta línea, al margen del tratamiento penal del fenómeno de la prostitución o sin entrar o considerar la futura regulación penal de esta materia, y tampoco la supuesta mayor o menor hipocresía social que pueda suponer la tolerancia de la misma, Vid. STSJ de Cataluña, sala de lo social, de 22 de marzo de 1996 (AS 1996, 646) en su fundamento de derecho 2º .

²⁹ Vid. SJS núm. 2 de Vigo, de 7 de mayo de 2004 (AS 2004, 1276): *“La prostitución es una violación continua y reiterada de la dignidad de la mujer; es un ataque frontal contra su arcano más íntimo, esto es, su capacidad de decidir en plena libertad sobre su indemnidad e intimidad sexual...”*.

2.4. Las notas de laboralidad y sus posibilidades de aplicación a la prostitución.

La aplicación del ordenamiento jurídico laboral exige que estén presentes al tiempo las cuatro notas que configuran éste según se define por el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, reiteradas nuevamente en el art. 8.1 del mismo texto legal, son: la voluntariedad, la ajenidad, la dependencia y la retribución, además del carácter personalísimo de la prestación de servicios. El contrato de trabajo, como la generalidad de los contratos, tiene la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, con independencia de la denominación que le otorguen las partes intervinientes, ello se determinará atendiendo a la realidad de su contenido manifestado a través de los actos realizados en su ejecución. La consideración del carácter laboral o no de una prestación no depende del *nomem iuris* dado por las partes intervinientes en el negocio jurídico sino del contenido real de las prestaciones y de la concurrencia de las características, antes apuntadas, que delimitan la relación laboral en el derecho español.

Dentro de las cuatro notas identificativas la relación de trabajo asalariado, debemos analizar si éstas se dan o no en este tipo de actividades que estudiamos. Si bien, hemos de tener presente que no podemos dar normas generales que puedan ser aplicables sin más a cualquier circunstancia, sino que para determinar si concurren las circunstancias que hacen merecedor a un supuesto de hecho de la aplicación de la legislación laboral y entender que estamos o no en presencia de un contrato de trabajo deberá estarse a cada caso concreto atendiendo a las particulares que allí se produzcan.

a) Voluntariedad.

La voluntariedad en el contrato de trabajo, al igual que en los otros contratos, es un presupuesto unido, implícito, a la propia idea de contrato. La decisión de trabajar es una decisión que se toma de manera libre y es voluntariamente aceptada.

Recordemos que el Código Penal en su art. 188.1 castiga a quien determine a otro a prostituirse o a mantenerse en la prostitución empleado violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima. Por lo tanto, a efectos de voluntariedad en la prestación del consentimiento debe entenderse que ésta no concurrirá si se dan cualquiera de aquellas circunstancias recogidas en el tipo penal pues su presencia viciaría el consentimiento otorgado.

A priori y sin entrar todavía a delimitar las posibilidades jurídicas de que se pueda entender válido un contrato de trabajo por darse esta nota en las relaciones de sexo a cambio de un precio cuando interviene un tercero, lo más transcendente a efectos de una relación laboral, nos parece que es la voluntariedad. Es decir, en el tema que nos ocupa sería: que quien decida prostituirse lo haga de forma libre, previa manifestación de su consentimiento y esa manifestación siga vigente y no desaparezca a lo largo de la vida del contrato, hasta el punto que el Tribunal Supremo viene afirmando que desaparece la consideración de contrato de trabajo cuando en una relación desaparece la voluntad de prestarlo, además de cuando inicialmente falta. El trabajador presta y ha prestado su voluntad a través de su manifestación inequívoca, `puede ser expresa o tácita, deja patente su acuerdo con su empresario. Por lo tanto, los trabajos que se

realicen con carácter forzoso por imposición de otra persona quedan excluidos de la legislación laboral, y también de la realización de un contrato civil o mercantil.

La voluntariedad en su plano negativo significa la falta de coacción, nadie puede ser obligado a realizar una actividad en contra de su voluntad, ni a permanecer retenido en un local, ni a acudir de él.

En ningún caso, desde el Derecho del Trabajo, se puede entender que la necesidad de un trabajo asalariado en el sentido que reporta un medio de vida- en no pocas ocasiones la única fuente de recursos- suponga la ausencia de consentimiento. Porque no es transcendente que dicha libertad contractual se base en una necesidad económica del trabajador, pues en este aspecto se trata de una voluntariedad formal, no material.

No podemos olvidar que el Código Penal español (desde la reforma de septiembre de 2003) no ofrece ninguna credibilidad al consentimiento de la persona que decide prostituirse cuando hay una tercera persona que se lucra de aquella acción, anulando toda su posible carga de voluntariedad, por lo cual dicho consentimiento no es válido por la ley.

b) Retribución.

El trabajador recibirá su salario en contraprestación al ejercicio de su trabajo, que es un trabajo dependiente. Con independencia del beneficio de aquél o del riesgo, por eso la legislación española se refiere a la prestación de servicios retributivos por

cuenta ajena, vinculando la retribución a la ajenidad, siendo esta última la condición definitoria del salario. La presencia de sistemas de remuneración basados en beneficios o en resultados no rompe con esta apreciación porque siempre estará a salvo para el trabajador un salario, que equivaldrá a la garantía mínima del salario (una parte de él, coincidente al menos con el salario mínimo) que es lo que significa que el riesgo lo asume el empresario, aunque del buen resultado de la empresa pueda repercutir en el importe total que perciba el trabajador. Por lo tanto, del hecho de trabajar por cuenta de otro se deriva la contraprestación que se recibe, que es el salario.

Sólo nos resta recordar en este apartado que la prohibición del art. 188.1 *in fine* del Código Penal (reformado en septiembre de 2003) de lucrarse de la prostitución ajena aun con el consentimiento de la persona que se prostituye impide que se dé y reciba un salario por esta actividad, pues dicho salario remuneraría el “beneficio” que obtiene el empresario de la prestación de quien se prostituye³⁰, aun incluso cuando el empleador no obtenga beneficio real alguno (pues no debe depender en este caso el lucro del balance contable, positivo o negativo, o de una cuenta de resultados de la empresa). Lo que excluiría de su consideración de contrato de trabajo por ausencia de esta nota (pues si se da sería un delito).

³⁰ En el mismo sentido De La Villa De La Serna, D., “Relaciones de hecho”, cit. p.11, al señalar la inadmisibilidad de un contrato de trabajo válido cuando el trabajo contratado es precisamente la facilitación del propio cuerpo a los clientes del empleador, justifica el autor la ilicitud en que una persona (empresario) consigue un lucro derivado de la explotación del propio cuerpo del trabajador. El mismo entiende que llegando a la respuesta anteriormente dada ya “no es necesario resolver el debate sobre la dignidad o la indignidad del trabajo en sí mismo”, el autor tiene razón, pero opinamos que siendo este aspecto referido a la dignidad el basamento para el reconocimiento o no de la prostitución como actividad laboral el jurista sí debe adentrarse en él.

c) Ajenidad.

Trabajar en régimen de ajenidad significa realizar una actividad por cuenta de otro, el empresario o titular de un negocio, a cambio de una remuneración. La titularidad de la empresa implica, de suyo, no sólo la organización y dirección de la misma sino que al empresario- y sólo a él básicamente- le corresponde soportar los riesgos de la actividad y percibir los beneficios que de la misma se obtengan.

La empresa hace suyos los frutos de la actividad desplegada por el trabajador, se trata de una adquisición originaria- no derivativa- de los frutos del trabajo por parte del empresario- persona distinta de quien los produce-. El trabajador ha asumido con la firma del contrato de trabajo la obligación de ceder al empresario los resultados de su trabajo.

En opinión de algunos sectores, entender admisible dentro de una relación laboral la prostitución, supondría avivar las redes de tráfico de seres humanos y trata de mujeres, es decir, el comercio de seres humanos, que tendría así un soporte legal para tal actividad que siempre debería ser considerada ilegal.

d) Dependencia

La cuarta nota se refiere a la dependencia, que es, junto con la ajenidad, una de las más definitorias de la relación laboral. El art. 1.1 del ET la define como hallarse bajo la dirección y organización de otra persona denominada empleador o empresario.

Esta dependencia que en nuestros días adopta una concepción laxa permite flexibilizar su concepto, más allá de los tradicionales indicadores laborales como el lugar de trabajo, los horarios establecidos o el modo de realizarlo, se fundamenta ahora desde una percepción amplia de la subordinación, de quién programa el trabajo que se realiza.

El contrato de trabajo exige la presencia de la dependencia, es decir someterse a los dictados, a las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de su poder de dirección, arts. 5c) y 20 del ET, en este caso de la prostitución significaría permitir que un tercero dirija la actividad sexual. Parece difícil coexistir un espacio para la libertad sexual cuando ésta debe estar dirigida y organizada por la dirección de una pretendida empresa dedicada al comercio sexual, porque la libertad está por encima de toda organización empresarial. Llegándose asimismo a interpretar que la necesidad del consentimiento en todo acto sexual anula la posibilidad de considerarlo contrato de trabajo porque no permite la entrada de la dependencia laboral- esto es, la organización o dirección de un tercer-, y puesto que sin la prestación de tal consentimiento nos encontraríamos ante figuras delictivas tipificadas como posibles agresiones sexuales o incluso violaciones.

Cabe cuestionarse, desde la óptica de la libertad sexual si ésta admite constreñirse como sucede, por ejemplo, con la libertad de expresión en las empresas de tendencia o si, en este caso, sería anularla totalmente. Y por otro lado, si la concepción de la dependencia graduada permitiría admitir la llamada desobediencia técnica de la dependencia graduada permitiría admitir la llamada desobediencia técnica, que no parece aquí muy apropiada. Sería más bien una desobediencia motivada en su condición

de persona y de los derechos que le son invulnerables. El hecho de reconocerse un margen de gradación a la dependencia, supone en determinados trabajos admitir la no concurrencia de algunas de las facultades que conforman el poder de dirección empresarial frente al ejercicio de tareas que permiten al trabajador adoptar decisiones sin someterse a órdenes estrictas (incluso desobedecerlas). No olvidemos que todas las legislaciones que han regulado como actividad laboral la prostitución (piénsese en el caso holandés o el alemán, neozelandés, de parte del Estado de Nevada, etc.) permiten el rechazo o negativa, por parte de la prostituta, a mantener relaciones sexuales con algunos clientes cuando aquéllas no lo deseen- incluso ya iniciados los primeros contactos-, a veces hasta para decidir los “servicios” que deseen proporcionar, además de elegir libremente a sus clientes.

Pero posiblemente, en la aplicación práctica de aquellas legislaciones comparadas aquel rechazo si fuera continuado en el tiempo ello supondría (o pudiera significar) la ruptura del vínculo contractual mediante el despido. Esa desobediencia si es continuada, suma a la imposibilidad de sujetar a “productividad” las relaciones sexuales que deben mantener y a la admisión de facto de la falta de dirección del empleador en esos supuestos cosa muy mal, a nuestro juicio, tanto con el propio reconocimiento de la prostitución como posible objeto del contrato de trabajo, como con las reglas que sostienen las relaciones laborales por cuenta ajena- pues permite a quien se compromete a prestar relaciones sexuales con terceros a cambio de un salario dejar de prestarlas porque considera que los cliente que quieren tener esos contactos no son apropiados o deseados, sin trascender cuáles son las reales consecuencias de tales rechazos para la persona contratada-.

También las legislaciones que han regulado la prostitución como trabajo asalariado son prudentes en otros aspectos, pues no se trata de una relación de trabajo comparable al resto, así aunque no tienen en principio acceso a la prestación por desempleo tras el abandono voluntario de la prostitución sí se les permite excepcionalmente acceder a un subsidio como desempleados (caso holandés). Tampoco las ofertas de trabajo de prostitución funcionan como el resto de la oferta de trabajo a nadie se le puede obligar- bajo sanción de suspensión o pérdida de sus prestaciones por desempleo- a que acepte un trabajo en el sector de la prostitución, ni tan siquiera las oficinas de empleo presentarán vacantes en este sector, lo que nos apunta al tratamiento reservado y cauto que a esta actividad se da en los Países Bajos a pesar de su regulación.

2.5. Algunas posibles dificultades para el reconocimiento de la prostitución como objeto del contrato de trabajo.

Despejadas las dudas sobre las notas de laboralidad en relación con la prostitución y una vez apuntado que las mismas no se dan en el vigente derecho español, queda reiterar lo siguiente. En primer lugar la prohibición de lucro en el delito de prostitución, introducido por la reciente reforma de septiembre de 2003 del Código Penal, no debe dejar de lado que hagamos algunas consideraciones que impedirían reconocer como trabajo por cuenta ajena la dedicación a la prostitución, al margen de aquella tipificación penal, debido a la dificultad de casar dicha actividad con el modo de desenvolverse la relación de trabajo. La concreción penal evita que alguien pueda vivir de la explotación sexual ajena, la prohibición se castiga igual que las otras formas delictivas. Si bien, el art. 1.2 del E.T no requiere el ánimo de lucro para ser empresario en un sentido laboral, es obvio que en este tipo de relaciones, si se vinculasen por contrato de trabajo, siempre estará presente dicho ánimo de lucro, que el empresario lo será en el sentido económico del término además de en el propiamente laboral. Porque estas condiciones económica y laboral van normalmente asociadas al empresario sujeto de derecho.

Otros datos singulares con respecto al contrato de trabajo serían los referidos a la edad y discapacidad. Salvo las excepciones para el menor de edad y mayor de dieciséis años en el ejercicio de algunas actividades o en el desempeño del trabajo en determinadas condiciones (prohibición de trabajo nocturno, o de aquéllos considerados perjudiciales para su salud así como para su formación profesional y humana), el derecho del trabajo muestra una tendencia a acoger en su seno a estos sujetos (menores

e incapaces) reconociéndolos con capacidad para el trabajo más allá de las concepciones civilistas de capacidad, es obvio que en una actividad como la prostitución estas especialidades no podrían existir, ni darse estas funciones típicas de un derecho calificado como social, cuya cualidad más loable es la integración de las personas, pues como se ha aludido en otro capítulo en relación a la prostitución existe una especial tutela jurídica para ellos (menores e incapaces) desde el mismo derecho penal.

Otros impedimentos legales que encontraría el reconocimiento de la prostitución estarían en los derechos básicos de los trabajadores, en especial el de su integridad física (junto a la adecuada política de seguridad e higiene), a la consideración debida a su dignidad (comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual o acoso) y el respeto a la intimidad, así como la interpretación que de ellos se haga.

Todavía para atender algunos otros motivos que impiden la inclusión de la prostitución en un contrato de trabajo, aunque sin ánimo exhaustivo, pensemos también en las causas de extinción del contrato, en especial en el despido disciplinario, si éste se debe a incumplimientos del trabajador, el derecho vigente considera un incumplimiento contractual, la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo (art. 54.2.f del ET). Atendiendo a la citada posibilidad de despedir, y aunque es merecedora de críticas importantes desde el propio derecho, en estos supuestos, en un porcentaje que puede ser alto- pues la adicción a las drogas se cita como una causa que conduce a la prostitución , también las prostitutas consumen algún tipo de sustancia psicoactiva habitual o esporádicamente y el alcohol se introduce en la vida de la prostituta para poder soportar esta situación- estaría abierta la posibilidad de extinguir la

relación por esta vía en cualquier momento, que como hemos visto regula una causa de despido disciplinario conductas que son muy comunes cuando una persona se dedica a la prostitución. Estas hipótesis sólo se mencionan aquí para poner de manifiesto una dificultad más, de las muchas que surgen, de entroncar la prostitución con el contrato de trabajo, que romperá unos de los pilares del propio Derecho del Trabajo como igualador en la relación de trabajo.

2.6. Debates sobre una futura regulación de la prostitución como un tipo de trabajo

En España³¹ se está colocando en la agenda política³² tanto el debate sobre la posible regulación de la prostitución desde de la perspectiva de su reconocimiento como un tipo de trabajo más, cuanto, como mínimo, la revisión crítica de la situación jurídica o social de la prostitución. Los principales escenarios del debate han sido, evidentemente, los reglamentos del Ayuntamiento de Bilbao y de la Generalidad de Cataluña³³.

³¹ Ciudades como Bilbao y gobiernos como el de la Generalitat de Cataluña han reglamentado las características que deben reunir los locales en los que se ejerce la actividad de la prostitución, reglamentación que ha sido fuertemente criticada por algunas asociaciones de mujeres que ven en estas iniciativas un intento de legalizar esta actividad. Asimismo, desde el Instituto Catalán de la Mujer se ha comunicado la intención de llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para dotar a las prostitutas de los mismos derechos que al resto de trabajadores. Se pretende que los y las trabajadoras sexuales tengan garantizada su autonomía para poder ejercer esta profesión, reconocimiento que irá acompañado de duras medidas para evitar la explotación de menores y las situaciones de esclavitud. Asimismo, se impulsarán programas de inserción social y laboral para aquellas prostitutas que deseen abandonar esta actividad.

³² Presidida por la senadora del PP Cristina Klimowitz, la Comisión de Prostitución del Senado, formada el 21 de marzo pasado, celebró ayer su primera reunión para estudiar las fórmulas que permitan un debate parlamentario sobre la prostitución en España. Se trata de la primera iniciativa emprendida sobre el particular desde la creación de las Cortes democráticas en 1977. “Pretendemos un acercamiento serio a la cuestión, sin dejarnos llevar por la doble moral y los perjuicios, para crear una opinión pública basada en el conocimiento real de esta actividad”, afirmó ayer Klimowitz.

La comisión, con representación de todos los partidos, trabajará en tres áreas, sin conocer todavía el tiempo que durará el proceso. Tampoco puede adelantar si la salida final será instar al Gobierno a que “legisle en toda regla, interpretándola como una actividad laboral legítima”, señala la senadora popular. En una primera fase, la comisión recopilará documentación y elaborará estudios comparativos de las leyes holandesa, alemana, sueca, las tres, en aplicación.

Posteriormente, miembros de la comisión se desplazarán a estos tres países, sin conocer in situ el resultado del funcionamiento de sus leyes y, finalmente, celebrarán entrevistas con especialistas sanitarios, sociólogos, representantes de asociaciones de prostitutas, movimientos feministas y ONG dedicadas a la inserción de las mujeres públicas.

³³ Hay este informe ordenado en diez ideas (pp. 2 a 6):

1ª) La prostitución en España “es una actividad *alegal*”, pues que no está regulada desde el punto de vista civil ni laboral, ni está criminalizada. A juicio de los autores del Informe, “dado que en principio el proxenetismo o intermediación entre prostitución y cliente no es una actividad ilícita, debería haber normas que lo regulen, como el resto de actividades lucrativas que se desarrollan en el territorio del Estado.

2ª) Las consecuencias de este vacío normativo “coloca al colectivo de prostitutas en una situación de desigualdad y desprotección social”, ya que “ejercen una actividad económica no reconocida

Por su parte, los Tribunales de Justicia ya han comenzado a estudiar esta cuestión desde el punto de vista del tipo de relación que une a las prostitutas de determinados clubs con los dueños de los mismos. Así, la Audiencia Nacional dictó el 23 de diciembre de 2003 una sentencia por la que resolvía la impugnación de la

o sumergida, no generan cotizaciones sociales, quedan excluidas de los beneficios que en materia de protección social protegen a los demás trabajadores”. Sin ignorar que “la conceptualización de la prostitución como actividad económica lícita es conflictiva y genera amplios debates, es necesario reconocer que existe una situación crítica que los poderes públicos tiene que resolver, dado que el estado actual de cosas implican una vulneración de los derechos de ciudadanía para un importante colectivo de mujeres, así como también se favorece el fraude fiscal (vía impuestos no pagados) y se crean problemas de futuro para el conjunto de la sociedad (por ejemplo al no existir cotizaciones a la Seguridad Social por el trabajo realizado por las prostitutas, se generan futuras pensiones no contributivas)”.

3ª) Las propuestas orientadas a resolver esta situación “se pueden reconducir a las políticas marco de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. De hecho, “este concepto ha guiado las últimas reformas en Alemania, Holanda y Suecia”, reformas que “parten de un mismo diagnóstico”, pero que plantean acciones diferentes.

4ª) Este enfoque, “no ha de perder de vista la totalidad de actores involucrados en el problema, no se trata sólo de un problema de mujeres”. Si bien son las mujeres “la parte más expuesta, visible y estigmatizada”, la cuestión también “involucra al cliente, al intermediario y al conjunto de la sociedad”.

5ª) La variación de tipos de prostitución “es alta y hace complejo el enfoque del problema y soluciones”. En Cataluña se están observando cambios importantes: “la sustitución de prostitutas españolas por extranjeras”, muchas de ellas “sin papeles” (en relación con un fenómeno de tráfico de personas desde Europa del Este, América del Sur y África subsahariana); cada vez más mujeres jóvenes en la prostitución; y se produce también un “aumento en la oferta de servicios”.

6ª) Las intervenciones policiales se centran en “la desarticulación de las redes de inmigración ilegal”. Llama la atención el “escaso porcentaje de denuncias por parte de las mujeres en relación con el volumen de prostitución” (seguramente, “porque las redes toman represalias sobre sus familiares en los países de origen o por el temor a ser expulsadas del país”).

7ª) Desde la organizaciones e instituciones que prestan asistencia a las mujeres en la prostitución se centra la actividad en “mejorar las condiciones de vida y salud de las mujeres y de actuar de nexo con las administraciones (tramitando, por ejemplo, salarios mínimos de inserción o pensiones no contributivas)”.

8ª) Según los resultados de las entrevistas, “el problema de salud más frecuente siguen siendo las enfermedades de transmisión sexual”. La mayoría de organizaciones entrevistadas “participa de programas de distribución gratuita de preservativos y de actividades de difusión y promoción de la salud sexual reproductiva”.

9ª) En cuanto a “la salida de la actividad”, algunas asociaciones imparten cursos de formación ocupacional que permitan encontrar alternativas laborales distintas de la prostitución. Pero los autores del Informe constatan que “no todas las mujeres que desean salir de la prostitución están en condiciones de encontrar otra ocupación (por edad, escasa calificación, etc.)” y que “todas las iniciativas de organizaciones no gubernamentales (en este sentido) tienen un alto grado de fragmentación y superposición al no basarse en el derecho de ciudadanía”.

10ª) El informe concluye considerado “imperiosa” la necesidad de “propiciar un debate en Cataluña y en el Estado sobre la regularización de la actividad sobre la base de las reformas de otros países de la Unión Europea”. El doble objetivo de las reformas habría de ser: “mejorar las condiciones de vida y trabajo de las mujeres que se prostituyen en Cataluña” y “elaborar salidas efectivas para las que deseen dejar la actividad y sustituirla por otra e intentar que cada vez sean menos las que elijan la prostitución como camino laboral o profesional no voluntario”.

Asociación Nacional de Empresarios Mesalina (ASNEM) contra la decisión de la Dirección General de Trabajo de no admitir sus estatutos por incluir en su actividad la prostitución que terceras personas ejercieran en sus dependencias. La Dirección General de Trabajo rechazó el planteamiento de ASNEM porque, en el ordenamiento jurídico español, esta actividad no se encuentra regulada sino sólo tolerada, no admitiéndose como actividad económica independiente. Sin embargo, esta sentencia establece que no se puede condicionar el ejercicio de una actividad económica a que esté regulada ya que la Constitución reconoce la libertad de empresa sin hacerla depender de la mayor o menor diligencia reguladora de los poderes públicos, reprochando implícitamente la falta de regulación de esta realidad social.

2.7. Análisis jurisprudencial laboral

El Tribunal Supremo tiene considerado que en la actividad llevada a cabo por las “alternadoras”- definida gráficamente como “captación de clientes varones, mediante el atractivo sexual al objeto de que consumiesen bebidas³⁴”- concurren las notas de ajenidad-al efectuarse con conocimiento y consentimiento de la titular del establecimiento³⁵-por cuenta ajena³⁶- pues la empleadora asume el beneficio y los riesgos de la misma: falta de pago de las consumiciones o abono de los destrozos que eventualmente se puedan producir en el local-, retribución, cualquiera que sea su forma³⁷- en la generalidad de los supuestos consiste en el 50% del precio de las consumiciones³⁸- cuya ausencia ha determinado que la actividad nos se considere como laboral³⁹ y, por fin, la dependencia, que no se entiende ya como subordinación rigurosa y absoluta⁴⁰, sino como una inclusión en el círculo rector y disciplinario del empresario⁴¹, pues fija el horario de trabajo y el precio de las consumiciones, controla el número de clientes⁴², facilita la utilización de las dependencias y taquillas para cambio de la ropa propia por otra adecuada a la actividad y, sobre todo, adopta medidas

³⁴ STS de 14 de mayo de 1985 (RJ 1985, 2712).

³⁵ STSJ de Andalucía Málaga de 14 de julio de 2000 (AS 2000, 5724).

³⁶ STSJ País Vasco de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002,1237), que cita en relación igualmente con el requisito de la ajeneidad las SSTs de 3 de marzo de 1981 (RJ 1981, 1301), 25 de febrero de 1984 (RJ 1984,923), 21 de octubre de 1987 (RJ 1987, 7172) y 4 de febrero de 1988 (RJ 1988,571).

³⁷ STS 25 de febrero de 1984 (RJ 1984,923).

³⁸ STS 21 de octubre de 1987 (RJ 1987,7172).

³⁹ SSTs del País Vasco de 21 de julio y 24 de noviembre de 1988.

⁴⁰ Como expresamente señalan las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de abril de 1998 y 13 de noviembre de 2001, Baleares de 28 de mayo de 1998; Andalucía/Málaga de 14 de julio de 2000 y 5 de octubre de 2001; Cataluña, de 11 de abril de 2002 y 17 de septiembre de 2003; Andalucía/Sevilla de 4 de diciembre de 2003, el hecho que las empleadas pudiera gozar de cierta libertad para realizar sus iniciativas de captación de clientela, y cierta libertad de horario de permanencia en los locales de alterne, no desvirtúa la relación laboral dado que la mayor o menor flexibilidad en el ejercicio de la facultad de dirección del empleador depende de la propia naturaleza de las tareas encomendadas al trabajador.

⁴¹ STS de 25 de febrero de 1984 (RJ 1984,923) y 21 de octubre de 1987 (RJ1987, 7172).

⁴² STS del País Vasco de 7 de abril de 1988 (AS 1988,2024).

disciplinarias en caso de incumplimiento de horario o de desempeño de la actividad de forma que no se consiga el objetivo de provocar que los clientes efectúen el mayor número de consumiciones.

El TSJ de Cataluña, y al objeto de fundamentar su decisión, hace especial hincapié en diferenciar con claridad la actividad de alterne de la de prostitución⁴³, debiendo advertirse que es la primera vez que una resolución judicial enjuicia por separado dichas actividades, teniendo en cuenta que se ejercían por las mismas personas, bajo la dependencia de una única empleadora y en idénticas condiciones de trabajo. En otros casos resueltos por la jurisprudencia, la actividad desplegada se circunscribía a la simple captación de clientes en las condiciones descritas, sin que en principio, y a tenor de los hechos declarados como probados, se llevase a cabo la actividad de prostitución en el ámbito de organización y dirección del empresario.

Pese a ello, ¿puede realmente establecerse una distinción entre las dos actividades? En la mayoría de las sentencias estudiadas parece que no y que la diferenciación es forzada y artificial. Baste para ello volver a recordar que queda acreditado que en el propio establecimiento donde se ejercía la actividad laboral de alterne, las trabajadoras realizaban también al menos un servicio diario de prostitución en habitaciones facilitadas por la titular del establecimiento, quien fijaba los precios para cada servicio, el tiempo de duración de los mismos y establecía idéntico procedimiento de reparto de los ingresos obtenidos por el cliente. Siguiendo el

⁴³ El mismo se ve en la sentencia del Tribunal Superior de Navarra de 28 de mayo de 2004 – (AS2004/2096) “debe afirmarse que en le presente caso no se afirma por el acta de la inspección la actividad de prostitución de las demandadas, sino simplemente la de alterne, que no se puede calificar por sí misma de ilícita; y además es evidente que por el carácter vinculante o forzoso, debiendo primar la protección social y laboral de las empleadas, cuando consta que realizan una actividad por cuenta ajena en un establecimiento dedicado habitualmente a las actividades de alterne, actividad retribuida por comisión, en beneficio de un empresario que se lucra organizando dicha actividad en un local habilitado al efecto, y que debe asumir en las cargas sociales y laborales de dicha actividad”.

razonamiento del Tribunal, también en la parte de la actividad dedicada a la prostitución concurrían las notas de dependencia, ajenidad y retribución.

Siendo las mismas trabajadoras y dándose las notas para calificar la relación como laboral ¿cuál es la razón que lleva el Tribunal a declararse sólo competente para enjuiciar la actividad de alterne? En respuesta a esta cuestión, a nadie se le escapa que cuando el objeto de la relación laboral es la prestación de servicios sexuales, la causa del contrato es ilícita⁴⁴ y, en consecuencia, deviene nulo de pleno derecho.

Como señala la STJ núm. 2 de Vigo de 9 de enero de 2002⁴⁵, “ningún tercero puede organizar ni dirigir la actividad sexual de ninguna mujer, porque atenta a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. El comercio sexual no puede ser objeto de lícito contrato de trabajo, la capacidad de decidir y la libertad sexual está por encima de la pretendida dirección y organización empresarial”. De ahí la importancia de la distinción que efectúa entre alterne y prostitución de forma tal que siempre que la actividad desarrollada no implique prestación de servicios sexuales, concurriendo las notas de dependencia, ajenidad y retribución, se pueda calificar la relación como

⁴⁴ En el voto particular formulado por los Ilmos. Sres. Don Santiago Romero de Gústillo, Don Alfonso Martínez Escribano y Don Senito Recuero Saldaña en el recurso 2006/03 que dio lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 4 de diciembre de 2003, afirman que no se puede reconocer relación laboral a la actividad de prostitución pues “en tal relación existe un objeto ilícito, lo que determinaría la ineficacia o nulidad del contrato. Tal ilicitud, deriva del grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras afectadas, de sus derechos a la libertad sexual y a la dignidad personal, riesgo que puede hacerse efectivo si al recurrente, dueño del local se le reconocen las facultades y derechos derivados de la condición de empleador y, con ello, los poderes directivos y organizativos, pues supondría la posibilidad de exigir a las interesadas el cumplimiento de las tareas contratadas, aún en contra de su libertad de actuación, además de favorecer, promover e inducir con ello al ejercicio de la prostitución, se trata de que calquemos con cánones éticos la actividad, así no decimos que sea inhumano o contraria a las buenas costumbres, sino de ilicitud, por contraria a la ley, de la actividad empresarial que facilita el ejercicio de la prostitución con evidente peligro de que ésta sea forzada y no libre”.

⁴⁵ (AS 2002,260)

laboral⁴⁶, con independencia de que sean o no las misma trabajadoras las que ejerzan ambas funciones y de que sea el mismo local donde se presten los servicios de alterne y prostitución. Sin embargo, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña⁴⁷, en el supuesto de una empleada que, como encargada del turno de día, se limitaba a realizar funciones de recepción de los clientes, cobro de los servicios prestados por las personas que ejercían la prostitución en el mismo local y atención a las llamadas telefónicas para concertar las citas, resuelve señalando que “ no hay duda, pues, que pese a las notas de ajenidad, dependencia, y retribución predicables del vínculo que unió a las litigantes[...] estamos, en realidad, en presencia de un contrato con causa ilícita y por ende, nulo de pleno derecho”. De tan rotunda afirmación se deduce que el ejercicio de la prostitución en un determinado local vicia de nulidad cualquier relación laboral que en el mismo se lleve a cabo, con independencia de que las funciones desarrolladas, incluyan o no la prestación de servicios sexuales. Ello contradice la anterior doctrina judicial que al distinguir entre alterne y prostitución permite calificar como laboral aquellas actividades donde no se presten servicios sexuales- recepción, limpieza mantenimiento, y también, alterne-.

⁴⁶ Como afirma, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia País Vasco, de 13 de noviembre de 2001 (AS 2002/1237)- “Hay prestación de servicios, consistente en realizar la actividad de alterne en las distintas variantes señaladas:

- Trabajo que las codemandadas no efectuaban desinteresadamente, sino en cambio de una retribución, siendo irrelevante, a estos efectos, el que ésta se fijase por un porcentaje sobre el total del precio satisfecho por el cliente.

- Actividad que dichas mujeres realizaban por cuenta de la hoy recurrente, para lo que resulta decisivo advertir que era quien corría el riesgo de la explotación del local en el que aquéllas efectuaban su trabajo, no existiendo indicio alguno expresivo de que fuesen ellas las que conviniesen con los clientes el importe de las copas y demás servicios que éstos consumían.

- Hay, así mismo, dependencia, por cuanto que realizaban esas tareas con los medios de la demandante; esto es, en sus instalaciones, con los medios materiales y personales dispuestos a tal fin por ella, sobre los que las citadas mujeres carecían de cualquier poder de disposición, siendo bien significativo de ello, incluso en la vertiente más usual del requisito, que habitualmente prestaran los servicios en las horas en que el local estaba abierto al público, como también lo revela que les exigiera un determinado modo de vestir.

- Acreditados, pues, esos requisitos, se presume legalmente (art. 8-1 ET) que dicha actividad la hacen voluntaria y personalmente, como también que no obedece a un título jurídico distinto al contrato de trabajo, completando, con ello, el cúmulo de los que se precisa para la existencia de un contrato de esta naturaleza.”

⁴⁷ Sentencia de 2 de enero de 1997(AS 1997, 340).

Mayor confusión introduce la STSJ de Galicia de 10 de junio de 2002⁴⁸ que al resolver una controversia en la que resulta probado que los demandados poseían un piso, dedicado a lo que ordinariamente se conoce con el nombre de “casa de citas”, y donde se ejercía la prostitución, se declara incompetente al faltar las notas de ajeneidad, retribución y dependencia, ya que quedó acreditado que “los servicios sexuales prestados por la actora se producían, cuando quería, acudiendo al piso regentado por la demandada y su esposo, cuando lo estimaba pertinente, y sin percibir remuneración o salario mensual, sino cobrando al cliente directamente o por medio del titular del piso, quien retenía una parte por comisión y gastos”, para concluir afirmando que “la circunstancia de que la demandante acudiese al piso a ejercer la prostitución, gozando de la más completa autonomía, es también suficiente para desvirtuar el carácter no laboral de los servicios prestados a terceros mediante precio, en el piso perteneciente a los demandados, por lo que con independencia de que la relación existente entre las partes litigantes tuviese una causa lícita o ilícita, es lo cierto que al no existir relación laboral procede declarar la incompetencia de este orden jurisdiccional”.

Otro punto es que constituye un hecho objetivo que, en la actualidad, existe una evidente vinculación entre la prostitución y el fenómeno migratorio⁴⁹ de la que se derivan cuestiones de indudable trascendencia, como la violencia de género o el tráfico de mujeres y menores. Como no podría ser de otra manera, esa conexión entre ambos fenómenos ha provocado un gran número de pronunciamientos judiciales, singularmente en materia de expulsión de extranjeros. En efecto, el artículo 26.1 f) de la derogada Ley Orgánica 7/1985 (RCL 1985, 1591) de derechos y libertades de los extranjeros consignaba como una de las causas de expulsión la permanencia en España

⁴⁸ (JUR 2002,240936).

⁴⁹ En España y en algunos ámbitos o modalidades de prostitución se calcula que el porcentaje de inmigrantes oscila entre un 70% y 80% del total de las personas que se dedican a dicha actividad.

careciendo de medios lícitos de vida. Pues bien, los tribunales españoles, han venido considerado de forma casi unánime que la actividad de alterne puede considerarse como medio lícito de vida, evitando con ello que se produjese la aplicación de aquella medida⁵⁰.

De la misma forma, y en relación con el delito tipificado en el artículo 312.2 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996,777)- delito contra los derechos de los trabajadores-, en diversas resoluciones judiciales se ha estimado que la situación de irregularidad de los inmigrantes y la actividad de alterne entendida como relación laboral, son subsumibles en dicho tipo penal, puesto que en definitiva la contratación, a tal efecto, de inmigrantes que carecen de permiso de trabajo perjudica, suprime o restringe derechos reconocidos por disposiciones normativas, en este caso las de carácter laboral⁵¹.

Si se analiza con detalle la doctrina judicial a la que se ha hecho referencia, se extrae la consecuencia de que, la realidad social de la prostitución caracterizada, entre otras notas, por la fuerte presencia de gran número de inmigrantes en situación irregular, ha dejado traslucir en el proceder de nuestros tribunales una utilización en algunos casos con claros desenfoques, del componente tuitivo del ordenamiento jurídico-laboral hacia la parte más débil, en este caso las personas que llevan a cabo dicha actividad. Ello ha mediatizado su valoración o calificación, lo que justifica en buena parte la existencia de un panorama tan confuso en esa materia.

⁵⁰ Pueden verse entre otras las SSTs de 14 de mayo 1985 (RJ 1985,2712), 21 de octubre de 1987 (RJ 1987,7172), 4 de febrero de 1988 (RJ 1988, 571), 21 de julio de 1995 (RJ 1995, 5948). También aunque con menos frecuencia, la actividad de alterne ha sido tenida en cuenta, en relación con el respecto la STS de 12 de noviembre de 2002 (RJ 2003, 955).

⁵¹ Confrontar entre otras la SAP de Granada de 20 de marzo de 2003 (JUR 2003, 181493) y la SAP de Baleares de 30 de diciembre de 1999 (ARP 1999, 5579).

Ejemplos significativos del actuar de los Tribunales en este sentido, pueden ser la citada SJS núm. 2 de Vigo de 9 de enero de 2002, que después de declarar que resulta imposible que el comercio sexual pueda constituirse en objeto lícito del contrato de trabajo, se pronuncia en los siguientes términos “pero aun no cerrando los ojos a la evidencia o incluso la necesidad de tener que legitimar esa actividad, nunca lo sería por cuenta ajena porque también sería cerrar los ojos al hecho de que, considerar esas relaciones como contrato de trabajo, sería tanto como dejar vía libre y constituirse en cauce legal para la trata de mujeres o las redes ilegales de inmigración, que integradas por traficantes dirigen a las mujeres a la industria del sexo y a los mercados de mano de obra barata, ya que su control escaparía a toda posibilidad de legalidad al estar amparados por la posible licitud”. Ante tal afirmación surgen de inmediato dos interrogantes de difícil respuesta ¿resulta lícito el ejercicio de la prostitución por cuenta propia?, ¿se constituye el contrato de trabajo en el único cauce para la trata de mujeres?

En el mismo sentido, y también como claro exponente de ese proceder judicial, puede traerse a colación la SAP de Baleares de 30 de diciembre de 1999⁵², en este caso en la jurisdicción penal y con relación al delito contra los derechos de los trabajadores. El tribunal, frente a la afirmación de los recurrentes de que no existía relación laboral, señala que “vista la jurisprudencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo conviene indicar que el hecho de concertar entre las partes una actividad consistente en prestar servicios consistiendo en permanecer un determinado período de tiempo en el local, sometida pues a horario para la captación de clientes, al objeto de consumir bebidas y de si consiente la “camarera”, mantener relaciones sexuales, evidencia una actividad en la que concurren las notas tipificadas de toda relación laboral, cuales son la prestación de

⁵² (ARP 1999, 5579).

servicios por cuenta ajena, habitualidad en los mismos, dependencia, retribución y jornadas determinadas”.

El tema ha suscitado el suficiente interés como para haber sido abordado por la jurisprudencia comunitaria. Pueden citarse al respecto las Sentencias del TJCE de 5 de febrero de 1991⁵³ - referida al ejercicio de la actividad por cuenta propia de camarera- y la de 20 de noviembre de 2001⁵⁴. En esta última, que específicamente se refiere al ejercicio de la prostitución, se resuelven varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinados artículos de los Acuerdos de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros y las Repúblicas Checa y Polaca por otra. El procedimiento se inicia con el recurso planteado por dos ciudadanas polacas y cuatro ciudadanas checas, contra la desestimación efectuada por el Secretario de Estado de Justicia neerlandés, de su solicitud de permiso de residencia para trabajar en Holanda como prostitutas por cuenta propia. La conclusión del Tribunal no deja a dudas al afirmar que los correspondientes artículos de los Acuerdos de Asociación citados deben ser interpretados “en el sentido de que la prostitución forma parte de las actividades económicas ejercidas de manera independiente a la que se refieren dichas disposiciones siempre y cuando se demuestre que el prestador de servicio la ejerce, sin que exista ningún vínculo de subordinación por lo que respecta a la elección de dicha actividad ni a las condiciones de trabajo y retribución, bajo la responsabilidad propia y a cambio de una retribución que se le paga íntegra y directamente”. Pues bien, pese a la claridad de su contenido, su invocación en la doctrina judicial española ha sido utilizada para justificar una supuesta licitud de la prostitución ejercida por cuenta ajena, utilizando

⁵³ (TJCE 1991, 125).

⁵⁴ (TJCE 2001, 314).

para ello como argumento la interpretación comunitaria de la realizada por cuenta propia⁵⁵, lo que en buena medida ha introducido un nuevo elemento de confusión.

En conclusión los Tribunales han reconocido y considerado como laboral la actividad de alterne, cuando en dicha actividad concurren las notas de ajenidad, percepción de salario, y dependencia, que no se entiende ya como una subordinación rigurosa y absoluta, sino como una inclusión en el círculo rector y disciplinario del empresario.

Sin embargo, los tribunales hacen distinción entre prostitución y alterne y separan dos actividades ejercidas por las mismas personas, bajo la dependencia de un único empleador y en idénticas condiciones de trabajo, causando confusiones y contradicciones en algunas de sus sentencias.

⁵⁵ Véanse al respecto las SSTs de 21 de julio de 1995 (RJ 1995, 5948), y 27 de febrero de 1997 (RJ 1997, 1543).

3. Legalización de la prostitución como profesión en otros países

3.1. Holanda-

La prostitución como tal nunca ha estado en Holanda penada por la ley y tampoco lo está ahora. El 1 de octubre de 2000 se levantó la prohibición general de establecimiento de burdeles. A partir de esa fecha, ha dejado de estar prohibido gestionar un establecimiento sexual en el que trabajen voluntariamente en la prostitución personas mayores de edad (de ambos sexos), siempre que el propietario tenga una licencia municipal (si se exige la obtención de la licencia) y cumpla las condiciones que se le imponen. Esto significa que los sex clubs, los burdeles de “escaparaté”, las casas privadas de citas y las empresas de servicios de acompañantes (escort) son ahora empresas legales⁵⁶, siempre que cumplan las reglas que les impone cada municipio. Con esta legalización, Holanda se ha convertido en uno de los primeros países en que la prostitución voluntaria ejercida por personas mayores de edad se considera formalmente una forma de trabajo.

La clave de la modificación legal que supone el levantamiento de la prohibición general de burdeles es la desaparición de los artículos 250*bis* y 432 del Código Penal Holandés. Con esta medida, se eliminó de los sótanos de la legislación holandesa la prohibición que pesaba sobre los burdeles. En su lugar, se ha aprobado el nuevo artículo 250a CP.

⁵⁶ Actualmente existen en Holanda asociaciones, oficialmente reconocidas, de empresarios del sexo y de clientes de la prostitución que son consultadas por el Gobierno, con el que colaboran, para fomentar sus intereses y promover la prostitución. Entre estas asociaciones están la Asociación de Empresarios de los Negocios de Relajación, Hombre/Mujer y la Fundación de la Prostitución.

Aunque la administración pública levantó el 1 octubre la prohibición general sobre los burdeles, todavía no se ha redactado ninguna ley nacional sobre la prostitución. La formulación y el mantenimiento de la política sobre la prostitución se han dejado conscientemente a los municipios⁵⁷, para que puedan tenerse en cuenta las condiciones específicas del ámbito local⁵⁸. Los municipios son los que imponen las condiciones para la admisibilidad de los burdeles en su término municipal⁵⁹.

Holanda ha optado por captar la letra de la ley a la realidad, con el objetivo de poner fin a las situaciones injustas e inadmisibles del sector de la prostitución. Al sacar de la esfera criminal la explotación de la prostitución, la administración tiene más posibilidad de controlar el sector para, de esta forma, dirigirlo y sanearlo. Al mismo tiempo, se endurece la actuación penal contra las situaciones injustas e inadmisibles. Con sus controles regulares, la policía ocupa una buena posición para percibir indicios de trata de personas, tanto en el sector regulado de la prostitución como en el no regulado. Todo ello en interés de las personas que se prostituyen y en interés de la lucha contra la trata de personas, la violencia sexual y los abusos sexuales.

Con la nueva legislación, se persiguen los siguientes objetivos:

⁵⁷ Algunos municipios de Holanda quieren poner en marcha una política que prohíba los prostíbulos, pero el Ministerio de Justicia ha dicho que la prohibición de la prostitución dentro de un municipio podría entrar en conflicto con el “derecho a la libre elección de trabajo” que garantiza la Constitución Federal o el Grondwet (Bureau NRM: 2002).

⁵⁸ Mediante la política de establecimiento puede influirse en la localización de las empresas dedicadas a la prostitución. Una empresa de este tipo no puede perturbar el ambiente y el entorno vital de un vecindario y su establecimiento debe ser conforme las reglas urbanísticas (plan urbanístico y plan de renovación urbana) y las ordenanzas sobre el entorno vital. Las reglas relativas a la instalación de una empresa dedicada a la prostitución contienen normas sobre las instalaciones (por ejemplo, las dimensiones mínimas del local de trabajo), la seguridad (contra incendios) y la higiene (por ejemplo, la presencia en el local de trabajo de un lavabo con agua corriente caliente y fría, la disponibilidad de preservativos).

⁵⁹ Con este fin los municipios poden establecer una política de concesión de licencias. Para poder explotar una empresa dedicada a la prostitución, se necesita una licencia y, para conseguirla, deben cumplirse determinadas condiciones. La Asociación de Municipios Holandeses (VNG) ha desarrollado al efecto un modelo nacional de ordenanza sobre establecimientos sexuales, comercios sexuales, prostitución en la calle, etc.

1. Control y regulación de la explotación de la prostitución (implantación de la política de licencias por parte de los municipios);
2. Protección de la posición de las personas que se prostituyen;
3. Mejora de la lucha contra la explotación de la prostitución forzosa;
4. Protección de los menores de edad contra los abusos sexuales;
5. Disminución de las dimensiones que alcanza la prostitución ejercida por ilegales;
6. Separación de prostitución y actividades criminales.

El levantamiento de la prohibición sobre los burdeles ha mejorado en varios puntos la posición de las personas que trabajan en la prostitución. La regulación municipal también contribuye a la mejora, incluyendo en las ordenanzas preceptos relativos a la seguridad, la higiene y las condiciones laborales dentro de la empresa dedicada a la prostitución⁶⁰.

Algunas de las condiciones que pueden exigir los municipios son: que no se obligue a beber bebidas alcohólicas con los clientes, a practicar sexo peligroso o a realizar determinados actos sexuales, y que los servicios sanitarios y las organizaciones para la defensa de determinados intereses tengan acceso sin restricciones a la empresa.

Un cambio importante es que, con el levantamiento de la prohibición de burdeles, la prostitución ha sido reconocida oficialmente como trabajo. Esto significa

⁶⁰El encargarse de que exista un buen acceso a la atención sanitaria, dando prioridad a la facilidad de acceso y la ausencia de medidas obligatorias, es tarea de los ayuntamientos. En primera instancia, el trabajar para la consecución de unas buenas condiciones laborales y sanitarias corresponde naturalmente al prostituto/a y a los titulares de las empresas. Los ayuntamientos vigilan para que los titulares de las empresas cumplan con sus responsabilidades. Con ese fin, pueden entre otras cosas exigir en sus normas sobre licencias el cumplimiento de determinados requisitos para adoptar las medidas preventivas necesarias y para controlar su cumplimiento.

que las personas dedicadas a la prostitución tienen los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos en activo. La larga prohibición y la situación de permisibilidad han hecho que las relaciones laborales se desarrollaran en el sector de la prostitución de forma distinta a los otros sectores. Debe fijarse la relación laboral real entre el propietario de la empresa de prostitución y el prostituto/a. Este es un asunto que atañe a ambas partes y sobre el que la administración no puede ejercer fácilmente ninguna influencia. Muchos propietarios prefieren trabajar sin contratos de trabajo y consideran la empresa como de tipo logístico, esto es: los prostitutas/a pueden alquilar las facilidades e instalaciones como autónomos, con lo cual es titular de la empresa no está obligado a pagar el impuesto sobre el salario ni las cuotas de los seguros sociales. La administración puede controlar si en realidad existe o no una relación de autoridad, para de esta forma evitar las construcciones ficticias.

Como el sector de la prostitución ahora debe cumplir las obligaciones habituales para los otros sectores, existe una mayor claridad sobre los derechos que tienen las personas dedicadas a la prostitución. Los titulares de las empresas se enfrentan con las consecuencias que conlleva presentarse como empleador a través del derecho laboral y también, por ejemplo, de los impuestos y las cuotas de los seguros sociales. La administración edita folletos para las personas dedicadas a la prostitución y para los propietarios de las empresas, que incluyen información sobre los seguros sociales, entre otras cosas. Estos folletos ofrecen ayuda a la hora de elegir entre trabajar como autónomo o como asalariado, informando sobre los derechos y obligaciones que implican ambas formas de trabajo.

Algunas de las responsabilidades de los titulares de las empresas son, por ejemplo: llevar una política de “sexo seguro”, ofrecer la posibilidad de asistir a actividades informativas y estimular a los prostitutos/as a que se sometan periódicamente a reconocimientos de enfermedades de transmisión sexual⁶¹. La Fundación para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, Soa Aids Nederland (“Soa” es la abreviatura neerlandesa de Enfermedades de Transmisión Sexual) ha establecido directrices a modo de manual para los médicos y especialistas, relativas a los exámenes de control de esas enfermedades a que deben someterse las personas que ejercen la prostitución⁶².

Desde el levantamiento de la prohibición sobre los burdeles, a la relación entre el prostituto/a y el titular de la empresa se le aplican las reglas del derecho privado, del cual forma parte el derecho laboral. Será decisivo saber si el prostituto/a puede determinar si se prostituye o no y cómo lo hace y si puede decidir terminar la relación laboral.

Normalmente, son también aplicables al sector legalizado de la prostitución las reglas aplicables al comercio y la industria en general, incluida la Ley de Condiciones Laborales.

⁶¹ Se ha optado expresamente por no establecer un reconocimiento médico obligatorio para las personas dedicadas a la prostitución. Esta obligación es estigmatizadora, ya que alimenta la idea de que los prostitutos/as son fuentes de infección. Además, los clientes pueden usar el reconocimiento médico obligatorio para pedir prácticas de sexo no seguras. Establece la norma que los controles médicos son de cuatro veces al año, son voluntarios y se aceptan de forma general porque las personas dedicadas a la prostitución reconocen su necesidad. En las grandes ciudades existen clínicas anónimas y gratuitas a las que pueden acudir los prostitutos/as para someterse a un reconocimiento.

⁶²El sexo seguro y una buena información para las personas dedicadas a la prostitución y sus clientes son la mejor protección frente al contagio de enfermedades de transmisión sexual.

La inspección de Trabajo ha publicado un folleto con información sobre la forma en que se aplica al sector de la prostitución la legislación sobre condiciones laborales, destinado a propietarios de empresas, empleadores y empleados, Servicios de Condiciones Laborales y ayuntamientos.

Una persona que ha ejercido la prostitución como asalariada y que, sin tener ninguna culpa, se encuentra desempleada, tiene derecho a un subsidio en virtud de la Ley de Desempleo. Al igual que el resto de los desempleados, un prostituto/a que está en el paro tiene obligación de buscar trabajo, debe estar disponible para el mercado de trabajo y está obligado a aceptar un trabajo apropiado para él o ella. Por supuesto, no puede obligarse a nadie a que acepte un trabajo en el sector de la prostitución⁶³.

Una persona que ejerce la prostitución y que no desee continuar ejerciéndola, tanto como autónomo como por cuenta ajena, no tiene derecho a un subsidio en virtud de la Ley de Desempleo (pertenece entonces al campo de acción de la ley de asistencia social). De hecho, esa persona pasa a estar desempleada de forma voluntaria y puede inscribirse en la oficina de empleo como demandante de trabajo.

Los prostitutas/as desempleados tienen derecho a un subsidio por incapacidad laboral si han trabajado en una empresa como asalariados. Este derecho sólo existe si el interesado no está en condiciones de realizar el trabajo propio u otro trabajo generalmente aceptado.

⁶³La prostitución está reconocida como trabajo, pero no se considera un “trabajo apropiado”. La consecuencia de ello es que la oficina de empleo tampoco presentará vacantes en ese sector, ni mediará para conseguir trabajo en el mismo.

Las reglas mencionadas anteriormente se aplican por lo demás a todas las personas que desempeñan o han desempeñado un trabajo en Holanda, y no sólo a las que se dedican a la prostitución o son propietarias de empresas en ese sector.

Los prostitutas/as y los empresarios son sujetos pasivos de los impuesto (así pues, aquí tampoco se hacen excepciones). Hacienda utiliza un criterio orientado al grupo destinatario que es uniforme en todo el país y mediante el cual se divide la responsabilidad de las obligaciones fiscales dependiendo de la relación laboral entre el empresario y la persona dedicada a la prostitución.

Los empresarios que tengan prostitutas/as asalariados estarán obligados a pagar las cuotas de los seguros sociales correspondientes a los empleados. Las cuotas deberán pagarse hasta el 1 de enero de 2006 a la entidad gestora encargada de los seguros sociales de los empleados (tras el 1 de enero de 2006, deberán pagarse directamente a Hacienda).

A las personas de fuera de la UE/EEE que no poseen un permiso de residencia vigente que les permita trabajar en Holanda, no se les permite obtener ingresos del trabajo personal y, en consecuencia, tampoco de la prostitución. En este grupo se incluyen, por ejemplo, personas con un visado de turista o personas que proceden de países cuyos nacionales no tienen obligación de obtener un visado y que pueden permanecer en Holanda un máximo de tres meses sin tener que solicitar el permiso correspondiente.

Los nacionales (incluidas las personas dedicadas a la prostitución) procedentes de países que hayan firmado un Tratado de Asociación con la EU (Bulgaria y Rumania),

podrán establecerse como trabajadores autónomos siempre que cumplan las condiciones aplicables al empresario autónomo (entre otras cosas, poseer un capital propio, un plan empresarial y hacer una aportación propia de conocimientos y experiencia profesional) y un permiso de residencia para realizar un trabajo como autónomo. En este caso, nunca podrá tratarse de un trabajo por cuenta ajena, aunque sea a tiempo parcial.

La Ley de Trabajo para los Extranjeros prohíbe que trabajen por cuenta ajena como prostitutas/as las personas que procedan de países de diferentes a los siguientes países de la UE: Holanda, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, España, Portugal, Alemania, Italia, Dinamarca, Grecia, Inglaterra, Irlanda y Austria (los 15 Estados que ya pertenecen a la UE durante largo tiempo). Los nacionales de esos 15 Estados de la UE pueden trabajar en Holanda como asalariados en el sector de la prostitución. A los nacionales de los Estados miembros de la UE que se incorporan a la Unión en mayo de 2004, se les aplicará una regulación transitoria hasta el 1 de mayo de 2006 en cualquier caso. Hasta ese periodo, los nacionales de esos países no pueden trabajar como asalariados en el sector de la prostitución.

Los nacionales de los países de la EU/EEE pueden trabajar en Holanda en el sector de la prostitución como autónomos o como trabajadores por cuenta ajena. El desempeño del trabajo les otorga derecho a residencia legal.

En Holanda se presta mucha atención a la búsqueda de prostitutas/as ilegales⁶⁴. En este marco, varios municipios han adoptado ordenanzas para reducir el número de

⁶⁴ Los extranjeros que permanecen en Holanda de forma ilegal deben abandonar el país en virtud de la Ley holandesa de Extranjería y, si es necesario, son expulsados.

prostitutos/as ilegales y se controla minuciosamente la existencia de construcciones ficticias.

3.2. Alemania-

En Alemania se ha derogado el art. 138.1 del Código Civil que califica el acuerdo entre prostitutas y clientes como contrario a la moral. La reforma se ha justificado con el argumento de que la anterior regulación no se correspondía con los tiempos actuales ni con la opinión social dominante y que, además, desplegaba efectos negativos sobre la seguridad física, social y jurídica de las afectadas.

También se ha derogado el art. 180.12 del Código Penal que prohibía la posibilidad de celebrar contratos de trabajo con quien regentara un burdel. A partir de la reforma, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2002, a la mujer en prostitución se le abre la posibilidad de estar legalmente asegurada, por cuenta ajena o como autónoma. Pero el proxenetismo y la incitación a la prostitución se siguen persiguiendo, con lo cual los burdeles no han legalizado su situación; los lugares de trabajo de las mujeres se consideran pensiones y no prostíbulos.

Con la nueva norma, las prostitutas asalariadas tendrán un contrato de trabajo, unas condiciones laborales mínimas (horario, sueldo básico, vacaciones, etc.) y una mejor cobertura social. Asimismo, se le reconocen ciertos derechos, como la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo a voluntad, la prohibición de sujetarse a requisitos de rendimiento ni a la dirección del empleador, más allá del tiempo y lugar del trabajo (tiene derecho, como en Holanda, a la libre elección del cliente), etc. Tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social (previa cotización correspondiente), a la atención médica de la sanidad pública, al seguro de paro y la pensión de jubilación, así como

buscar una readaptación profesional, pero, como sucede en Holanda, la ley alemana no da acceso a las prostitutas extranjeras.

La Ley Alemana sobre la regulación jurídica de las prostitutas, contiene aspectos de transcendencia laboral, que podíamos estructurar en tres bloques:

1) Entendiendo por prostitución la realización de actos sexuales por medio de remuneración anteriormente acordada, reconoce el derecho de ejercitar acciones contra impagos de clientes por ejercicio de la prostitución, con independencia de que sea ejercida por cuenta propia o en régimen de subordinación (relación de ocupación) y siempre en función de la duración temporal destinada a tal prestación.

2) El crédito exigible no se puede ceder sólo se puede hacer valer en nombre propio. Regula los posibles motivos de oposición al crédito generado (excluyendo cualquier otra posibilidad diferente- aun contemplada en la ley civil para otros contratos), sólo admite tres supuestos: la prescripción del mismo, la aplicación del art. 362 del BGB, así como su reducción motivada en un incumplimiento en parte de la duración del tiempo inicialmente acordado.

3) Otorga derechos propios de Seguridad Social a quienes se dedican a esta actividad y permite incorporarla al trabajo por cuenta ajena- haciendo expresa mención a las limitaciones en la recepción de órdenes-, declarando la ley que no existe ningún inconveniente para tales admisiones. Por lo que concierne a la dependencia el art. 3 de esta Ley – *Gezetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituirten*- deja claro que respecto a las prostitutas el derecho limitado de dar instrucciones en el marco de una

actividad dependiente no será inconveniente para admitir que existe una ocupación por cuenta ajena. Es decir, la Ley es prácticamente constitutiva al declarar la existencia de relación laboral en estos supuestos, pues la posible “ausencia” de dependencia (que la ley entiende como relajación de esta nota de laboralidad) no constituye un obstáculo para su inclusión dentro del contrato de trabajo en orden a recibir los beneficios de Seguridad Social reconocidos a estos trabajadores. En fin, la legislación alemana opta más por el reconocimiento de los beneficios sociales propios de los trabajadores que por la “normal” consideración como relación laboral, reconociendo implícitamente que no es equiparable al resto.

Según la Ley sobre la *lucha contra las enfermedades sexuales* de 23 de julio de 1953, las personas susceptibles de transmitir enfermedades venéreas están obligadas a someterse a controles médicos. Sin embargo, son las Regiones las que regulan sobre control sanitario, lo que da lugar a que existan divergencias entre regiones⁶⁵. Por ejemplo, en Berlín o Hamburgo se ha suprimido la obligación del examen médico y en otras regiones se combina con una atención psico-social. En cualquier caso, se observa que el control de la prostitución es mucho menos estricto que anteriormente, pero se sancionan las infracciones relativas a las zonas de prohibición y cualquier tipo de publicidad relativa a la prostitución.

⁶⁵ El ejercicio de la prostitución está reglamentado por los gobiernos de las regiones, de tal manera que ciertas autoridades son más liberales que otras. La prostitución puede prohibirse en las poblaciones con menos de 50.000 habitantes y las autoridades gubernamentales pueden prohibir la prostitución en un número ilimitado de vías públicas, calles, plazas y otros lugares públicos, así como imponer horarios relativos a su ejercicio.

3.3. Grecia-

En Grecia, el control de las prostitutas se regula en la Ley de 20 de agosto de 1981, relativa a la protección contra las enfermedades venéreas.

Para poder ejercer la prostitución es preciso que la mujer tenga más de 21 años, sea soltera, viuda o divorciada y presente su solicitud a la policía. Después de su examen, la policía presenta la solicitud al Delegado de Gobierno, que procederá a calificarla como prostituta. Además de solicitar la autorización previa, la prostituta griega debe someterse a revisiones médicas quincenales que se anotarán en una cartilla sanitaria que se le entrega al mismo tiempo que la autorización. También se pueden imponer otros controles sanitarios a personas que no han sido reconocidas como prostitutas como las mujeres que trabajan en bares, cabarets y otros establecimientos similares o a aquellas mujeres que se pueda probar que trabajan como prostitutas en lugares públicos.

En el ámbito penal, las mujeres pueden ser condenadas a tres meses de prisión si no respetan las obligaciones y prohibiciones que reglamentan esta actividad. La prostitución clandestina está prohibida y sancionada.

Los clubs están prohibidos, por lo que las prostitutas griegas trabajan en pisos. Existe una amplia reglamentación sobre la disposición y ubicación de estos pisos, la relaciones con los vecinos y se prevé una separación necesaria entre dos pisos en los que trabajen las prostitutas para proteger la vida social de los vecinos del barrio. El

órgano encargado de decidir sobre todas estas cuestiones es un Comité, formado por un oficial de policía, un médico y una asistente social, que informará a la policía sobre cada prostituta y establecerá limitaciones y prohibiciones.

Se pueden conceder doce autorizaciones de instalación cada dos años en una misma zona. En cualquier caso, si se producen denuncias de los vecinos, el Comité puede limitar este número o no renovar las autorizaciones anteriormente otorgadas si se juzga que la vida cotidiana de la zona está siendo perturbada.

3.4. República Checa-

Este país, en el que se prostituyen unas 10.000 personas, aprobó un proyecto de ley para reglamentar la prostitución. Según esta normativa, los checos sanos, mayores de 18 años y sin antecedentes criminales que quieran prostituirse, deberán registrar su oficio y trabajar como autónomos. Pagarán impuestos y la seguridad social y sanitaria y acudirán a exámenes médicos regulares.

El objetivo del proyecto es separar la prostitución legal de la ilegal, reducir los riesgos médicos y también la criminalidad relacionada con ella.

3.5. Nueva Zelanda-

Es reciente la disciplina de la prostitución que se ha aprobado en Nueva Zelanda con la *Prostitution Reform Act* de 23 de junio de 2003 y que se propone “salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores sexuales y protegerlos de la explotación”, así como, específicamente, su “bienestar, salud y seguridad” tanto como la “salud pública”, y “la prohibición de que se impliquen en la prostitución menores de 18 años” (art.3).

Establece ciertos requerimientos respecto de la salud y seguridad tanto para los *operators*⁶⁶, a los que se obliga a adoptar y promover prácticas de sexo seguro y de información sobre prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (necesidad de profiláctico; deber de información, oral o escrita, a los trabajadores sexuales y a los clientes y de información escrita visible en el burdel; deber de adoptar todas las medidas para minimizar el riesgo de adquisición de enfermedades de transmisión sexual)⁶⁷, como para los trabajadores sexuales y los clientes (obligación de utilizar profiláctico, de minimizar el riesgo de contraer o contagiar enfermedades de transmisión sexual, etc.)⁶⁸. La ley también prevé algunas restricciones sobre la publicidad de los servicios sexuales: no podrán anunciarse por televisión, radio, cine o prensa escrita (salvo en anuncios clasificados)⁶⁹ y las autoridades locales podrán dictar ordenanzas prohibiendo o regulando rótulos o carteles que anuncien en lugares públicos

⁶⁶ Definidos en el art. 5 como aquella “persona que, sola o con otras, tiene la propiedad, controla o gestiona el negocio (de la prostitución); e incluye (sin limitación) a cualquier persona que sea el director de la empresa o que determina cuándo o dónde un trabajador sexual deberá trabajar o las condiciones de su trabajo o la cantidad de dinero que el trabajador sexual recibirá como pago de la prostitución”.

⁶⁷ Art. 8. La sanción por contravenir estas reglas es de multa no superior a 10.000 dólares.

⁶⁸ Art. 9. La sanción en este caso es menor que en el caso de los *operators*, puesto que la multa no podrá exceder de 2.000 dólares.

⁶⁹ Art. 11. La sanción en caso contrario es una multa que puede llegar a 50.000 dólares en caso de una empresa o de 10.000 en el resto.

servicios sexuales si provocan molestias a las personas que utilizan ese entorno o si es incompatible con otros usos de esa área (arts. 12-13). Tales autoridades podrán regular el emplazamiento de los burdeles (art. 14).

La Ley reconoce, por otro lado, ciertos derechos específicos a los trabajadores sexuales: derecho a no ser compelido a proveer servicios sexuales (a través de cualquier promesa o amenaza proveniente de persona con autoridad por su posición laboral o por su relación con el trabajador sexual, o por amenaza de revelar que se halla ilegalmente en suelo neozelandés, o a cambio de drogas, etc.⁷⁰); derecho a rehusar servicios sexuales en cualquier momento, incluso aunque haya comenzado la relación (art.17); derecho a no perder los beneficios de la seguridad social por abandonar la condición de trabajador sexual (art.18). Sin embargo, el trabajo sexual no conlleva el permiso de residir en Nueva Zelanda a los inmigrantes (art.19) y se prohíbe participar (como inductor, beneficiario o cliente) en la prostitución a los menores de 18 años (arts. 20-23)⁷¹.

También contiene la disposición previsiones (art.24-33) sobre la potestad inspectora tanto por parte de *Medical Officer of Health* como directamente de la propia Policía.

Obviamente, los *operators*, deben contar con una licencia de negocios de prostitución (art. 34.1)⁷². Los *small owner-operated brothel*, es decir, los burdeles en los que no hay más de cuatro trabajadores sexuales y cada uno de ellos retiene el control sobre su actividad (art. 4.1), no necesitan licencia. El procedimiento para otorgar la

⁷⁰ Quien contravenga esta disposición se expone a una pena de prisión con un límite superior de 14 años (art. 16.3).

⁷¹ El art. 23.1 contempla una pena privativa de libertad de hasta 7 años para quien contravenga esta prohibición.

⁷² En caso contrario, se exponen a una multa de hasta 10.000 dólares.

licencia se estipula en los arts. 35 a 40: debe presentarse la solicitud, el registro debe notificar por escrito las razones; no se puede conceder la solicitud a quienes tengan antecedentes penales (sobre todo por delitos sexuales). La licencia debe renovarse anualmente y puede revocarse si el titular incurre en alguna de las descalificaciones previstas legalmente. La norma no se olvida de la protección de los datos de identidad de los solicitantes y de licencias, que sólo pueden ser inspeccionadas y/o copiadas por el solicitante, el Registro o la policía en el marco de la investigación de un delito (art. 41), aunque el Registro puede elaborar información estadística de tales datos (de modo que no permita identificar individualmente a ninguna persona).

La Ley crea un Comité de *Prostitution Law Review* (arts. 43-46), integrado por once miembros nombrados por el Ministerio de Justicia (a propuesta de los Ministros de Juventud, de las Mujeres, de Salud, de Interior, de Comercio- “para representar a los *operators* de los burdeles”-, de Gobierno Local y del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda [tres miembros en este caso]). Las competencias de este Comité son calcular el número de trabajadores sexuales y analizar cualquier otro asunto relativo a la prostitución e informar al Ministerio de Justicia; (entre los tres y los cinco años después de la entrada en vigor de la Ley) revisar la efectividad de la Ley, valorar su impacto y la naturaleza y adecuación de los medios disponibles para evitar o desanimar que la gente sea trabajadora sexual, así como examinar posibles cambios normativos. El Ministerio de Justicia debe remitir copia de este Informe a la Cámara Baja, la *House of Representatives* tan pronto como lo reciba.

3.6. Australia-

Las casas de prostitución se legalizaron en Victoria en 1984. En 1995 se despenalizó su existencia en Nueva Gales del Sur. Incluso se ha legalizado la existencia de Casas de prostitución en el Territorio de la capital de Australia, en el que se encuentra la capital Canberra, así como en Queensland. La propuesta de legalización en Australia Sur ha sido denegada mientras que, sin embargo, se está promoviendo en Australia Oeste y en Tasmania.

Los argumentos aducidos para la legalización en Victoria, fueron:

- Ejercer un control sobre la actividad de las casas de masajes ilegales;
- Prevenir y evitar la expansión de esta actividad.
- Finalizar con la prostitución callejera, en la idea de que las mujeres dedicadas a la prostitución preferirían ejercer su actividad en las casas de prostitución legalizadas.
- Proporcionar una mayor seguridad a las mujeres dedicadas a la prostitución evitando malos tratos, crímenes y violaciones, considerando que se encontrarían protegidas en las casas de prostitución.

Quienes desearon dirigir una casa de prostitución, hasta ese momento llamados proxenetas y desde entonces considerados respetables hombres de negocios, tuvieron que solicitar la licencia correspondiente y necesaria. Se constituyó una Cámara de Control de la Prostitución con objeto de emitir las correspondientes licencias y controlar esta actividad. Una de las responsabilidades de la Cámara era la inspección médica de las mujeres dedicadas a la prostitución.

El negocio del sexo se ha convertido en una industria tan rentable en este país que, el pasado año, el mayor burdel de Australia, Daily Planet, hizo historia al convertirse en el primero que cotiza en bolsa. El valor de la compañía que lo gestiona se duplicó en tan sólo unos días.

3.7. Estados Unidos-

El Estado norteamericano de Nevada, que es la única que no la prohíbe en los Estados Unidos, o, al menos, no lo hace con carácter general, porque la permite, según el *Nevada Revised Statute* parágrafo 201.354, si se ejerce dentro de una casa de prostitución con licencia. El art. 19.4 de la Constitución de Nevada, que reserva el poder de iniciativa y referéndum al pueblo de cada condado o municipio, combinado con el parágrafo 244.345 del *Nevada Revised Statute*, que permite a los condados de un cierto número de habitantes otorgar una licencia para abrir una casa de prostitución, posibilitan a los ciudadanos de Nevada permitir o prohibir la prostitución en cada condado.

Cuatro condados la prohíben, otros seis la prohíben salvo en zonas determinadas y siete la permiten⁷³. En el condado de Nye, por ejemplo, una zona rural ubicada en el centro del Estado, el código establece diversas especificaciones sobre rótulos⁷⁴, iluminación exterior⁷⁵ o salud pública⁷⁶.

Un consejo, el Board of Country Commissioners, tiene competencias para realizar requerimientos y revocar las licencias. La parte más importante de la regulación es la relativa a la salud. Obliga a las profesionales a someterse a controles mensuales de SIDA y sífilis y semanales de gonorrea. Una mujer en prostitución, incluyendo una que la ejerza en un burdel con licencia, y que lo siga haciendo después de dar positivo en la

⁷³ Las regulaciones varían bastante entre sí.

⁷⁴ No mayor de 24 pies, situado a la entrada del local, y debe contener las palabras “brothel”-burdel- o “House of Prostitution”.

⁷⁵ No más de tres luces rojas en el exterior, que no exceda de 200 vatios por bombilla.

⁷⁶ La expresión “es obligatorio el uso de condones” debe ser visible en el interior del local.

prueba del SIDA puede ser penalmente castigada con una pena de privación de libertad de dos a diez años y una multa de diez mil dólares.

3.8. Suecia – *(una medida diferente)*

Es un país que está dando un tanto marcha atrás después de décadas de permisividad, el 1 de Enero de 1999 entró en vigor la ley que castiga la compra de servicios sexuales. Los clientes pueden ser condenados desde el pago de una multa hasta una pena de prisión de seis meses⁷⁷.

Tiene, por lo tanto, una legislación nueva donde reconoce que la legalización es violencia y una violación a los derechos humanos. Contempla el castigo a los chulos y a los clientes que pagan por recibir sexo, y en cuanto a la prostituta seguirá sin ser penalizada por su oficio⁷⁸. El mero acercamiento a una prostituta o la simple maniobra de aminorar el vehículo en zona de “Tolerancia” puede suponer un indicio racional de “culpabilidad” para los potenciales presuntos clientes.

El segundo periódico de Suecia, Göteborgs- Posten (El Correo de Gotenburgo), publicó recientemente una serie de artículos, en los que incidía, que tanto la policía como los tribunales imponen a los “compradores de sexo”, penas de menor envergadura que a otros criminales. Desde que la ley entró en vigor, 249 hombres fueron acusados de comprar sexo a cambio de dinero, en su mayor parte en la calle, 26 confesaron y fueron multados sin pasar por un tribunal y 33 fueron condenados a pagar una multa.

⁷⁷ La pionera legislación sueca en su primer año de aplicación, once clientes fueron condenados y otros 42 están siendo investigados, según explicó la parlamentarista sueca Elisabeth Markström.

⁷⁸ La filosofía es que hay que atacar es a la demanda, pues si esta disminuye la oferta tiende a desaparecer.

4. La tendencia de la legalización de la prostitución como profesión en algunos países.

4.1. Brasil-

Audiencia de mayor publico del ano en la Asamblea Legislativa⁷⁹, realizada en el día 20 de agosto y requerida por el diputado Durval Ângelo, discutió el Proyecto de ley nº 98/2003, en tramitación en la Camera Federal, de autoría del diputado federal Fernando Gabeira (PT- RJ), que reglamenta la prostitución y prevé la exigencia del pago por el servicio de naturaleza sexual.

El diputado también ha propuesto la exclusión del Código Penal brasileño de los artículos que criminalizan los que favorecen a la prostitución (art. 228), a la casa de prostitución (art. 229) y el tráfico de mujeres (art. 231).

De acuerdo con la propuesta brasileña, queda garantizado a la prostituta el derecho de la cartera firmada, jubilación, asistencia sanitaria y otros beneficios. En suma ese proyecto intenta disminuir la exclusión social a la que muchas prostitutas son expuestas.

En el Ministerio del Trabajo ya hay un registro para las profesionales del sexo.

⁷⁹ Al fin de la reunión, ha sido entregado un “abaixo assinado” de apoyo al proyecto, con 10 mil asignaturas. Además de Gabeira, estaban presentes en la audiencia la coordinadora da Rede Brasil de las Profesionales del Sexo, Gabriela Silva, el presidente del Grupo de Apoyo y Prevención de Sida, Roberto Chateaubriand, la presidenta de la ONG Musa- Mujer y Salud, Mônica Bara.

4.2. Tailandia-

Centenas de funcionarios del gobierno, académicos y prostitutas están participando de un debate nacional en un forum organizado especialmente para tratar del asunto.

El gobierno argumenta que la legalización de la prostitución daría acceso a la seguridad social, salud y protección contra los abusos para 200 mil personas. La medida también ayudaría en exponer la corrupción de policiales, políticos y propietarios de bares y burdeles e iría permitir que prostitutas y sus empleadores pagasen impuestos.

Un estudio realizado en 1997 por el Ministerio de Sanidad Pública de Tailandia concluyó que, de un total de 104.262 trabajadoras empleados en unos 7.759 establecimientos en que podían obtenerse servicios sexuales, sólo 64.886 vendían su cuerpo; el resto eran personal de apoyo, incluidas limpiadoras, camareras, cajeras, aparcacoches y guardias de seguridad.

La industria de la prostitución en Tailandia movimiento US\$ 4,3 billones, y economistas estiman que ella sea responsable por el 3% de la economía del país y las mujeres que trabajan en el sector del sexo en las zonas urbanas transfieren anualmente a sus familias de las zonas rurales una suma próxima a los 300 millones de dólares, cifra

que en muchos casos supera los recursos financieros destinados por los gobiernos a los programas de desarrollo para esas zonas⁸⁰.

⁸⁰ www.bbc.com/brasil/hutl

Bibliografía

Alonso Olea, M. y Casas Baamonde, M. E., *-Derecho del Trabajo-*, 21ª ed., Madrid, Civitas, 2003.

- Alves da Costa, João- *Droga e Prostituição em Lisboa-* Publicações Dom Quixote (col. Best Sellers), 4ª edição, 1983, Lisboa.

-Bantman, Béatrice- *Breve historia del Sexo*. Editora Paidós, 1ª edición, 1998, Barcelona. Título original: *Brevè histoire du sexe*; publicado en francés por Calmann-Lévy, París.

- Baylos, A. y Terradillos, J., *-Derecho Penal del Trabajo-*, Editora Trotta, Madrid, 1997.

- Ben Hoch Sanz, Pablo- *¿Trabajadoras del sexo? En torno al carácter laboral de la actividad “alterne”*. Comentario a la STST de Cataluña, de 17 de septiembre 2003 (AS 2003/3211). Aranzadi- nº 17- febrero de 2004. pp62-74.

- Eslava Galan, Juan- *Historia secreta del sexo en España*. Ediciones Temas de Hoy, S. A. (T.H.), primera edición: enero de 1996, Colección: Bolsistemas, Madrid.

- Fernández Villarino, R., *“El alterne y la prostitución. La legítima asociación de sus protagonistas y los efectos de su consideración laboral”*, Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 74, 2004, pp. 235 a 248.

-Guereña, Jean-Louis- *La prostitución en la España contemporánea*. Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A., 2003, Madrid.

- Hodgkinson, Liz- *El sexo no es obligatorio*. Título original: *Sex is not compulsory*. Traducción: Edith Zilli, Javier Vergara Editor S.A., setiembre de 1988, Buenos Aires- Argentina.

- Nuñez Roldan, Francisco- *Mujeres publicas: Historia de la prostitución en España*- Ediciones Temas de Hoy, S.A. (T.H.), Colección: Historia de la España Sorprendente, 1995, Madrid.

-Rey Martínez, F., Mata Martín, R., Serrano Argüello, N.- *Prostitución y Derecho*- Editorial Arazandi, SA, Colección Monografías Arazandi, 2004, Navarra.

www.mfa.nl/contents/pages/822/pdfqaprostitucion.pdf

www.servicios.hoy.es/pg050528/prensa/noticias/sociedad/200505/28/HOY-SOC-196.html

www.escolar.net/MT/archives/002570.html

www.westlaw.es/westlaw/verFicheroImpresion.do?codImg=AS_2004_2096110

www.westlaw.es/westlaw/verFicheroImpresion.do?codImg=AS_2002_1237_11

www.elpais.es/articulo.html?d_date=20020410&xref=20020410elpepisoc_3&type=Tes&anchor=elpepisoc

www.lavozdegalicia.es/se_sociedad/noticia.jsp?CAT=105&TEXTO=3426817

www.swedenabroad.com/pages/general_28982.asp

www.embajada-hungria.org/s/press_boletin.htm

www.iglesia.org

www.catwinternational.or (Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres (CICTM/CATW) 08/01/2004

www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/sex.htm

www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/1998/36.htm